

**UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR**

**SEDE ECUADOR**

**COMITÉ DE INVESTIGACIONES**

**INFORME DE INVESTIGACIÓN**

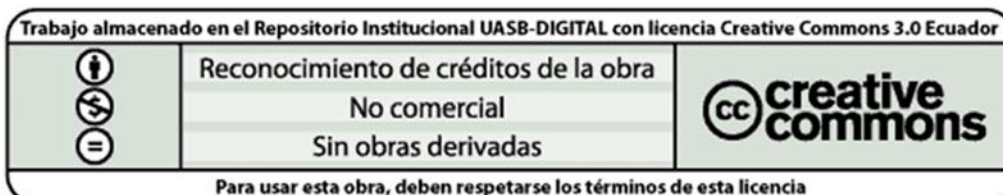
**Movimiento indígena en contextos de Revolución Ciudadana: debates y  
experiencia en torno a la crisis**

**INVESTIGADOR RESPONSABLE**

**Stalin Gonzalo Herrera Revelo**

**Quito – Ecuador**

**2019**



## **Resumen**

El movimiento indígena constituye el actor popular organizado más importante desde 1990 hasta estos días. Sin embargo, a pesar de que ha mostrado enorme capacidad de movilización y mantienen cierto capital político en relación al resto de movimientos, desde el 2000 la crisis del movimiento es un tema recurrente para los investigadores sociales. Este trabajo, construye cronológicamente un estado del arte del debate con la intención de: observar el carácter contextual y núcleo fenomenológico de la reflexión de los autores; enfatizar en el hecho de que la crisis estaba instalada antes del gobierno de la Revolución Ciudadana; y finalmente intentar entender cuáles fueron los efectos de la “Revolución Ciudadana ” sobre el movimiento.

## **Palabras clave**

Movimiento indígena, crisis, gobierno progresista, movimientos sociales

## **Datos del autor**

Candidato PhD en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México; Master en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sociólogo por la Universidad Central del Ecuador. Investigador Asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos, trabaja temas relacionados con movimiento sociales, indígenas, campesinos y trabajadores rurales; transformaciones y procesos agrarios; conflictos sociales, política pública, estado y acumulación. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO, Estudios Críticos del Desarrollo Rural; y de la red de universidades e instituciones de investigación: Grupo Tierra - Territorios, ruralidades, ambiente y alimentación.

## Índice

Introducción .....	4
La crisis en el ascenso y éxito del movimiento.....	6
Los primeros signos del problema .....	19
La crisis en la “revolución” .....	22
Las dimensiones de la crisis.....	38
La experiencia de la crisis.....	41
¿Cómo se explica la crisis? .....	43
El estado como trampa.....	48
Factores organizativos de la crisis .....	52
Conclusiones .....	56
Bibliografía .....	60
Entrevistas:.....	62

## Introducción

Desde los años 90 el movimiento indígena se convirtió en el actor popular organizado más importante del país, su fortaleza organizativa y su acción política lo situó como el núcleo para la articulación y agregación de otras fuerzas populares (movimiento de trabajadores, izquierda, mujeres, cristianos de base, etc.); así, los movimientos sociales, con el movimiento indígena a la cabeza, ocuparon el vacío político dejado por el movimiento de trabajadores que perdió fuerza tras los años 80. El movimiento indígena y los movimientos sociales además se situaron como plataforma y representación política que los partidos no pudieron llenar (Cueva, 1993).

Su avance y articulación fue un proceso exitoso en muchos sentidos. En una sociedad marcada por la herencia colonial y/o el *colonialismo interno*, su acción rompió las fronteras étnicas y amplió los márgenes de la democracia al incorporar el debate por el reconocimiento de los derechos colectivos y las ciudadanía diferenciadas (constituciones de 1998 y 2008). Además inspiraron la producción de una propuesta política que renovaría los *horizontes de cambio* (Estado Plurinacional, economía comunitaria, Soberanía Alimentaria, interculturalidad, derechos de la naturaleza, territorio, autonomía y autogobierno, etc.).

Los efectos de su acción política no fueron menores ni quedaron en aspectos puramente discursivos, en poco tiempo el “movimiento” irradió elementos de su propuesta en distintos ámbitos de la sociedad. Se ampliaron y promovieron nuevos derechos en las constituciones de 1998 y el 2008; desde 1996 estuvieron presentes en los gobierno locales (alcaldías, juntas parroquiales, prefecturas), con la propuesta de avanzar en un poder desde abajo se impulsaron gobiernos alternativos que disputaron los viejos poderes locales; se moldearon interesantes y prometedoras instituciones para el ejercicio de derechos colectivos (Salud Indígena, Educación Intercultural Bilingüe, FODEPI, CODENPE, PROLOCAL, ECOARE, etc.); se logró la revitalización de las identidades y nacionalidades indígenas; se impulsaron y abrieron debates en torno a varias leyes (Ley de las Instituciones Indígenas del Ecuador, Ley de Aguas, Consultas a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Circunscripciones

Territoriales Indígenas, Administración de Justicia, Ley de Consultas, etc.); y en el 2001 también mostró que podía presentarse como una opción de poder al tomarse en congreso en una alianza con los militares.

Además, el movimiento impulsó un proceso de cambio que no se limitó a sus demandas y pudo imaginar una consigna para el conjunto de la sociedad, “nada solo para los indios”<sup>2</sup>. De hecho, la propuesta del movimiento indígena rompió con los márgenes locales y particulares, para presentarse como un proyecto con capacidad de universalizarse (Barrera, 2001; Saltos 2001).

Sin duda el elemento más concreto y visible para la sociedad, fue la capacidad de veto que el movimiento instaló sobre el *avance del proyecto neoliberal*.<sup>3</sup> El trasfondo de este veto está relacionado con su rol en la fractura del *régimen de control* y de dominación de las élites sobre la sociedad, vista también como la crisis política y de representación.<sup>4</sup>

Entonces ¿cuándo empieza el declive del movimiento?. Aunque en el 2003 ya se habla de la crisis del movimiento indígena, centrada en las disputas de los dirigentes que participaron en la alianza con el gobierno de Lucio Gutiérrez; a lo largo de la Revolución Ciudadana (2007-2017) el debate en torno al debilitamiento y crisis del movimiento es aún más “claro”. Sobre todo porque las disputas internas se han tornaron más visibles y el movimiento afronta mayores dificultades para lograr movilizaciones de las dimensiones a las que nos había acostumbrado en la década anterior.

---

<sup>1</sup> Para Ampliar parte del debate se pueden consultar los trabajos de: Ospina, Pablo. Et al. (2008). Mapeo de actores y análisis de poder para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito.

<sup>2</sup> La consigna fue elaborada en el levantamiento indígena del 2001

<sup>3</sup> Los movimientos sociales y el movimiento indígena varias veces lograron hacer retroceder los intereses de las elites: en 1995 en la consulta popular contra la privatización de las áreas estratégicas del estado, en 1997 con la expulsión de Abdalá Bucaram, en 1999 contra las intenciones de Mahuad de subir el subsidio del gas y la crisis financiera que termino en la dolarización, en el 2001 levantamiento para evitar se retire el subsidio al consumo de la gasolina durante el gobierno del presidente Gustavo Noboa; en el 2002 y 2005 frente al TLC con Estados Unidos, y finalmente en el 2005 en la expulsión de lucio Gutiérrez.

<sup>4</sup> Sobre el tema hay dos debates, uno instalado por Andrés Guerrero (1993) y otro planteado por Ospina y Guerrero en el (2003); el primero hace referencia a la relación existente entre la ruptura del viejo régimen de hacienda y el control de poblaciones y la emergencia del movimiento indígena en los 90; y el segundo usa la categoría de la *crisis dóxica* de Gramsci para explicar la fortaleza del movimiento y sus efectos sobre el sistema político nacional; en ambos casos la crisis del régimen de dominación y la ruptura de “lealtades” amplia el margen de acción política de los movimientos y estos contribuyen a profundizar su crisis.

Las interpretaciones sobre la crisis son varias y no hay concesos ni una sola explicación, tal como señala Ospina (2008) incluso al interior del movimiento se pueden encontrar varias interpretaciones. En ese sentido, la intención de este artículo es aportar en este debate para lo cual nos hemos planteado tres objetivos: a) Construir un estado del arte o **debate** sobre las causas (hipótesis) de la crisis del movimiento indígena en el Ecuador; b) Recoger la **experiencia e interpretación** que los dirigentes indígenas de segundo grado de las organizaciones de la CONAIE sobre la crisis del movimiento; y c) Analizar el efecto del gobierno de la **Revolución Ciudadana** sobre la organización social.

Metodológicamente, se compilaron trabajos que tratan directamente e indirectamente la crisis del movimiento indígena, los cuales se analizan cronológicamente observando la relación entre la hipótesis de los autores y el contexto histórico en el que se escriben. Con la intención de recoger la experiencia de las organizaciones frente a la crisis o tratar de entender ¿cómo las organizaciones interpretan la crisis? Inicialmente planteamos una serie de entrevistas con los dirigentes medios del movimiento, pero el esfuerzo resultó más complejo de lo que se esperaba, los dirigentes no necesariamente viven en sus territorios y eso obligo matizar la muestra inicial. Es decir, considerar las entrevistas de dirigentes nacionales. Finalmente, junto a las entrevistas y las conclusiones se realiza el análisis de los efectos del gobierno de Rafael Correa sobre el movimiento indígena.

## **La crisis en el ascenso y éxito del movimiento**

Hacia el año 2000, el movimiento vivía una euforia política luego de triunfar en las movilizaciones contra los ajustes estructurales promovidos por el presidente Jamil Mahuad (agosto 1990 – enero 2000). El levantamiento indígena terminó en la toma del Congreso y la expulsión del gobierno.

“(…) el movimiento indígena se ha constituido en un espacio referencial de la sociedad, y ha logrado una importante participación en el sistema político, captando alcaldías, prefecturas, diputaciones, el control de algunas instituciones del Estado, y está también su proceso político más importante, el 21 de enero del 2000, cuando logró la destitución del entonces Presidente Jamil Mahuad, y estuvo por breves horas al frente del gobierno. (Editorial ICCI, 2002:2).

“En el levantamiento de 1990, la agenda de negociación contenía 16 puntos, entre los cuales constaban algunos que eran de interés nacional, pero su énfasis hacía referencia a los conflictos de tierras y de territorios, entre lo más importante. Nueve años después, en el levantamiento de julio de 1999, la agenda de negociación del movimiento indígena es exclusivamente nacional. Todos los puntos hacían referencia a todo el país, y ninguno en especial remite a la problemática particular del movimiento indígena. Los indios, en ese proceso, habían asumido la representación nacional en la negociación con el Estado, y contaban además con un gran respaldo y legitimidad ciudadanas. En el levantamiento de febrero de 2001, la consigna central del levantamiento fue: “Nada solo para los indios” (Dávalos, 2003:19).

Si bien el asalto al poder duraría una noche, el acto tuvo un efecto importante en la subjetividad de la población y al interior del movimiento, pues la acción tuvo gran respaldo de la población y le permitió al movimiento imaginarse a sí mismo como futura alternativa política. Sin embargo, en este momento de acenso y euforia se inaugura el *debate sobre la crisis del movimiento*.

Las primeras alertas vinieron del interior del movimiento, en medio de las “celebraciones” de los avances y éxitos. **Luis Macas (2000)**, dirigente fundador y expresidente de la CONAIE será uno de primeros dirigentes en hablar sobre el tema. Luego, con la participación del Pachakutik en el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2006), su salida de la alianza siete meses después, las crecientes disputas internas y las limitadas acciones de movilizaciones frente al propio Gutiérrez que es expulsado del país por la movilización de la población; los debates entorno a crisis crecen dando un primer panorama sobre el problema.

### *Diferenciación política*

Como decíamos, el primero en mencionar la crisis es Luis Macas (2000), quien observa que la crisis del movimiento indígena está asociada al individualismo de la dirigencia, su distanciamiento de las bases y la presión de un sector que demandan la dirección de la organización.

“Uno de los problemas al interior del movimiento quizá sea que hay intencionalidades individuales a su interior, lo cual estaría representado en un **“indigenismo puro” que no logra entender que “solos no lograremos nada”**; una **“distancia entre la dirigencia y**

**la base”** que limita la conducción; y saber que en “La práctica - y en eso se ha basado el éxito del movimiento indígena- es la de los consensos, incluso para los levantamientos, si no hay consensos no hay nada”” (Macas, 2000:5).

Luis Macas, poco antes de la alianza con Gutiérrez, observa que el movimiento enfrentaba la falta de unidad interna que a la larga debilitaba la capacidad de mantener la organización interna, la identidad cultural y los consensos como práctica; así como negociar con los “otros”, los aliados. Pero sobre todo, resalta las diferencias y disputas entre las tendencias internas, en este caso el “indigenismo puro” (Macas, 2000).

A Luis Macas se suman otros trabajos que observan cómo el proceso de *diferenciación interna*, empuja el desarrollo y mayor presencia de tendencias políticas que disputan la dirección de la organización; y rompen con la *articulación social* que había sido una de las fortalezas que permitieron ampliar la resistencia al neoliberalismo; y por otro lado, las crecientes tensiones como resultado de una dirigencia que actúa sobre la base de intereses personales (*individualismo político*) y se separan de su base social.

Saltos (2001), por ejemplo, observa que tras las movilizaciones de febrero del 2001, las mesas de diálogo privilegiaron la negociación entre el gobierno y el movimiento indígena, desplazando la participación de los otros movimientos sociales ya que las mesas se realizaron sin la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS).

“Una prueba de esta situación está en el proceso seguido en el diálogo con el Gobierno. Durante el levantamiento se logra un acuerdo entre las organizaciones indígenas y los movimientos sociales sobre un Mandato unitario que centra su atención en los ejes de poder: ir desde el rechazo al alza del gas y los pasajes a un cuestionamiento al modelo neoliberal, enfrentando las privatizaciones del patrimonio nacional (seguridad social, petróleo, electricidad), el salvataje bancario, la reforma tributaria y el Plan Colombia. Y dentro de esta perspectiva global, abordar los temas específicos de cada sector: conflictos de aguas, fondos indígenas y para la producción, demandas provinciales. (...) Pero este mandato es archivado. La **representatividad no está en el tema formal de la exclusión de representantes de la CMS en la mesa de negociaciones; sino en la exclusión de los temas fundamentales que congregan a los demás sectores** y, por tanto, en la reducción a temas indígenas (indemnizaciones, fondo indígena, banco de fomento, conflictos de aguas), mientras los demás ejes quedan como complementarios y discursivos y como



materia de acuerdos formales (comisiones de estudio, cronogramas de reunión). **Con ello, el movimiento indígena empieza a debilitar su relación con la sociedad civil**, que ha sido una de las fuentes de su fuerza en su período” (Saltos, 2001:web).

A decir del autor, en este momento primaron las *posiciones etnicistas* y el particularismo. La coyuntura muestra un proceso en el cual el movimiento avanza, se transforma y con esto la dirección. Este cambio de dirección se traduce en la ruptura del movimiento con la agenda de la CMS, lo cual también es posible por el énfasis del estado en la negociación y la debilidad de los otros movimientos sociales.

Bajo el mismo argumento, la editorial del Boletín Rimay del Instituto Científico de Culturas Indígenas, en el 2002 propone una evaluación política del movimiento y plantea dos problemas: la relación con el estado, y la disputa entre la CONAIE y el PK como una disputa entre lo *social* y lo *político*.

Así, la coyuntura muestra un doble debilitamiento del movimiento indígena a nivel político. Por una parte, el proceso de las mesas de diálogo desgastó y erosionó la legitimidad social de los indios, y, por otra, la incompreensión de los **roles del movimiento social y el movimiento político**, generan una fragilidad política de los indios como proyecto político nacional y alternativo. (...) El hecho de que no se hayan delimitado con precisión estos espacios y las agendas y estrategias de cada uno de ellos, hacen que el **movimiento social (CONAIE) y el movimiento político (Pachakutik), entren en un proceso de bloqueo mutuo, de deslegitimación y de juegos y disputas internas por el poder** (ICCI, 2002).

En aquel momento, el ICCI criticaba la ruptura de la alianza con los otros movimientos sociales y la posibilidad de construir un movimiento nacional, esto, resultado de la creciente tensión entre la CONAIE y el PK que evaluaban la alianza política con Lucio Gutiérrez para disputar las elecciones. La lectura política era optimista puesto que, tras la toma del Congreso en el 2000, las movilizaciones del 2001 que había evitado la eliminación a los subsidios al gas y las marchas del 2002 contra el posible acuerdo de libre comercio ALCA y la popularidad del movimiento estaba en ascenso.

Pasado el triunfo de Gutiérrez y la ruptura de la CONAIE siete meses después, Dávalos observa , en el 2003, que el “movimiento ha cambiado”, la acción de tomarse el Congreso

en el año 2000 y ganar las elecciones del 2003 con Gutiérrez, lo llevan a afirmar que el movimiento dejó el particularismo y avanza en la construcción de un sujeto político nacional. Sin embargo, su tránsito por estado mostró más debilidades que fortalezas del sujeto que se universalizaba,

“(…) Los indios están en la coyuntura en la cual deben transformarse a sí mismos en términos políticos. Esa transformación implica en realidad una transformación de la política en el Ecuador. Luego de su breve experiencia en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el movimiento indígena sale debilitado aunque no fracturado. Tiene que reconstituirse y para ello tiene que regresar a las fuentes primarias de su poder: sus comunidades, sus bases. (...) Hay **distancias muy grandes entre la dirección del movimiento indígena y sus comunidades**. Son distancias que se explican por el **tiempo político, por la coyuntura, por las definiciones de una agenda nacional que se ha ido imponiendo como la agenda natural de la dirigencia indígena**. Pero a su interior, los procesos que eran su riqueza natural, están abandonados. La dirigencia nacional, absorbida por la coyuntura interna y externa, ha debilitado los contactos con sus bases” (Dávalos, 2006:20).

Más allá del proceso electoral, las disputas internas entre el movimiento indígena y los dirigentes que decidieron mantenerse en la alianza con el gobierno se profundizaron y se volvieron visibles; esta sería una de las razones por las cuales el movimiento no participó en la destitución de Gutiérrez, habían intereses de dirigentes y sectores con el gobierno. Así, el conflicto minó la credibilidad del movimiento, y resultaba evidente que la debilidad estaba asociada al conflicto en la “dirección” del movimiento.

A la hipótesis inicial de *diferenciación política*, nuevas tendencias, disputa por la dirección del movimiento y ruptura de las articulaciones con otros sectores; Sánchez Parga (2001), antropólogo con amplio trabajo en zonas indígenas, sumará dos elementos. El autor llama a observar el contexto dominado por el neoliberalismo, en el cual, el sistema político y el gobierno es ocupado por una lógica oligárquica con la cual no es posible construir representación social y política. Para el autor en tal contexto se produce un declive de los movimientos sociales, un fenómeno que es visto como la pérdida de capacidad de intervención democrática de los movimientos, el ascenso de la protesta y la violencia como formas de acción. Contexto al cual se suma,

“(…) una profunda segmentación al interior de todo movimiento entre su dirigencia y sus bases. Dado que el patrimonialismo dominante en la sociedad tiene efectos estructurales en todos sus ámbitos y procesos, también los movimientos sociales acusan y reproducen una dirigencia patrimonialista y cacical, con una tenaz **imposibilidad de institucionalizar poderes tradicionales**, logrando en el mejor de los casos mantener las estructuras arcaicas de liderazgos personalistas bajo ideologías, cuadros y formalidades institucionales modernas. Consecuencia de esto es el fortalecimiento de las dirigencias y organizaciones en detrimento de las bases” (Sánchez Parga, 2001:29)

Con esto, el autor recoge una “particularidad cultural” de la disputa interna. Si bien reconoce la importancia de la comuna, las tradiciones y la cultura en la configuración del movimiento, las diferencias internas y las disputas están relacionadas con una herencia cultural política donde prima el *patrimonialismo* y *casiquismo*. Así, las formas de la crisis (los conflictos internos y la división dirigencia/base) es resultado de la presión del neoliberalismo que tiende a cerrar las instituciones de representación y la dificultad del movimiento para afirmar sus tradiciones democráticas frente a la “cultura política” en la que priman las figuras patrimoniales y cacicales.

#### *Acción de cooptación externa*

A esta “fenomenología” de la crisis o la crisis vista en el marco de las crecientes tensiones del movimiento, Bretón (2001) plantea una **segunda hipótesis**, observa que la división de las organizaciones está relacionada con la acción de cooptación de dirigentes por parte de actores externos, ONG y agencias de cooperación, específicamente el PRODEPINE.

“Muy al contrario, la experiencia de los Andes del Ecuador muestra sus tremendas limitaciones como entidades aliviadoras de la pobreza y, a la vez, su extraordinaria eficiencia como cooptadoras y encapsuladoras de los pisos intermedios del movimiento indígena. Ésa es la herencia, por lo menos una de ellas, que recoge el Banco Mundial a través del Prodepine. Lo prioritario —se diga lo que se diga, y se justifique como se justifique— no son ya los proyectos productivos estricto censo, sino **el encuadramiento de las elites locales y de sectores prominentes de la intelectualidad indígena en la maquinaria desarrollista**” (Bretón, 2001).

A esta hipótesis se suma el trabajo de Miguel Guatemal (2006), el cual extrema el argumento de Bretón al plantear que, dada la importancia del movimiento indígena, este

se había convertido en una amenaza para los intereses transnacionales por lo que se despliega una acción deliberada de los agentes internacionales para separar a los dirigentes y fragmentar el movimiento.

"Los técnicos fueron llevados a organismos del Estado, a las ONG, a la cooperación internacional, obtuvieron becas de estudio (entregadas individualmente, sin pasar por las organizaciones), etcétera. No sólo los sacaban de la Conaie, las organizaciones regionales y las federaciones, sino además **los hacían funcionales y copartícipes de las políticas que implementaban estas instituciones (como el BM o el BID)**. (...) El Estado y varias ONG, en lugar de tratar con la organización local central, negocian con estos organismos, estimulando competencias de poder. En la Amazonía, los gobiernos (en especial el de Lucio Gutiérrez) usaron al Ministerio de Bienestar Social, al Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) y a otros organismos públicos. (Guatemala, 2006:8).

Para Guatemala, es un momento en el que los técnicos pululan por las distintas instituciones de gobierno muchas de ellas controladas por Indígenas. En esta explicación, las agencias de la cooperación serían responsables de la deformación de la dirigencia que accede a puestos de manera individual sin pasar por la delegación de las organizaciones indígenas, reforzando así la diferenciación interna y minando la autoridad de la organización.

En estos trabajos, la cooptación de la dirigencia rompe con uno de los fenómenos que habían sido centrales en la emergencia del movimiento: la presencia de una capa de intelectuales que disputan el sentido de la historia e hacen de lo indio una adscripción identitaria y política positiva (Ibarra, 1999).

#### *"Complicidad" de la dirigencia*

En una intersección entre la diferenciación interna, el individualismo político, y la creciente distancia entre la dirigencia y su base; Roberto Santana (2004), desarrolla argumento complejo de imaginar en ese momento<sup>5</sup>, al revisar los escasos avances en

---

<sup>5</sup> Luciano Martínez (2005) criticará el artículo y argumento del autor como la "decepción de los indianófilos postmodernos" frente a los cambios socioeconómicos que vive el sector rural.

términos de bienestar económico de la población indígena atribuidos a los limitados efectos de la acción política del movimiento (cooperación al desarrollo, gobiernos locales, instituciones indígenas, etc.), extrema el individualismo político y plantea que el problema está relacionado a una *complicidad de la dirigencia indígena* con los intereses de las élites.

Aunque sea duro decirlo, la observación objetiva de la realidad ecuatoriana revela la imagen de **un movimiento indígena organizado que está en complicidad objetiva, o si se quiere en una "complicidad implícita", con las élites oligárquico-burguesas** del país, principales interesadas en que nada cambie en las tradicionales reglas del juego que le permiten reproducirse, medrar y mantener el control sobre la sociedad (Santana, 2004:257).

El problema de fondo, es el personalismo de la dirigencia y su distancia con las demandas de las comunidades. Para el autor, es un momento en el cual, tanto las élites económicas como el movimiento indígena (por su ideología de izquierda y perspectiva clasista de oposición), se resisten a cambiar y permitir el avance de la *modernidad neoliberal* que guarda en su seno la posibilidad de democratizar la sociedad.

Las élites y la dirigencia indígena habrían configurado intereses comunes para que las cosas se mantengan como están: las élites porque son dueñas de monopolios nacionales y el estado indispensable para su reproducción; y los indígenas porque cuentan con instituciones que aseguran su acenso social (gobiernos locales, cooperación para el desarrollo, instituciones de gobierno, etc.).

#### *Los límites del proyecto*

Según Hidalgo (2003), el paso por el gobierno constituyó *la primera derrota política del movimiento indígena*, no porque el movimiento haya salido del gobierno sin mayores conquistas institucionales, sino porque la dirección de movimiento privilegió una inserción/negociación en el marco de los derechos liberales y burgueses que le despojó de su radicalidad política.

“en el salto de los proyectos particulares, en este caso sociales, étnicos y culturales, hacia un proyecto político de bien común, se produce la **metamorfosis de un discurso crítico**

**al sistema hacia un discurso de concertación con el mismo, a nombre de ese interés general expresado en un horizonte que no impugna las relaciones de propiedad, ni las estructuras estatales, ni las relaciones centro-periferia en el contexto mundial.** Esa mutación, que en verdad es un retroceso, se expresa, entre otros, en el campo de la economía, de las visiones sobre la estructura de la sociedad, el posicionamiento ante temas como: deuda externa, acuerdos con el Fondo Monetario y Banco Mundial, negociaciones con las potencias capitalistas, zonas de libre comercio, distribución de la riqueza, reforma tributaria, reforma laboral, entre otros. Allí fueron desplazados los voceros de los sectores populares y colocados los representantes directos de los empresarios y las transnacionales” (Hidalgo, 2003:web).

La metamorfosis se refiere a la conversión de un movimiento que representa la lucha anti sistémica (estructural y de clases), a un actor que demanda derechos particulares en el marco de los derechos liberales. Con esto, el movimiento pierde la capacidad de representar a otros sectores, ampliar su articulación y avanzar en la constitución contra hegemónica, sino que se limita en el campo de su disputa particular.

Años después, Dávalos (2006) retoma este argumento y enfatiza que el problema es la falta de radicalidad y claridad política, el movimiento se centrado en una estrategia liberal poniendo su fe en el Estado. Podríamos decir que es un movimiento de reformas y no de revoluciones y que el proyecto Plurinacional se convertía en un proyecto liberal,

"En realidad, perdimos por el escenario que se fue configurando, en el cual nuestras posibilidades, nuestra movilizaciones y nuestra lucha se estrellaron contra un muro: el muro del discurso liberal. El movimiento indígena no cometió errores de apreciación más allá de los normales, sino que se estrelló con un muro que ya está experimentando Bolivia: el muro del discurso liberal. **Resulta que todas nuestras prácticas, incluso las prácticas emancipatorias, las estamos poniendo en clave liberal.** Por eso fallamos, porque pensamos que la Constitución Política era el instrumento clave que nos iba a permitir cambiar la correlación de fuerzas; pero el texto no marca el contexto. Es simple: la correlación de fuerzas se cambia en virtud de la lucha de clases. Y es lucha de clases porque el territorio en el cual se inserta el movimiento indígena es económico. Y es económico porque es el territorio del ajuste estructural, de la reforma estructural, del Fondo Monetario, del Banco Mundial." (Dávalos, 2006: 46)

El autor, nos planteaba una terrible contradicción, el movimiento indígena había avanzado en muchas dimensiones, pero era un éxito lleno de “perdidas”. En la medida en que el movimiento avanza y sus acciones moldeaban derechos, el movimiento no lograba transformaciones estructurales y cambios sustanciales en las relaciones de poder que organizan a la sociedad. Es decir que la reforma en la constitución y las normas no eran suficientes para cambiar la sociedad y la situación de los indígenas.

Desde una perspectiva distinta, en reacción al argumento de Roberto Santana, Luciano Martínez (2005), plantea que la crisis del movimiento indígena es el resultado de un largo proceso de desgaste organizativo que se observa en tres fenómenos de la coyuntura: 1) la división de la base social del movimiento con la ruptura entre CONAIE y FEINE; 2) el conflicto interno entre los dirigentes de la CONAIE; y 3) el alejamiento progresivo del mundo mestizo –visto en el rol protagónico que tuvo en la caída de Lucio Gutiérrez en la cual el movimiento indígena estuvo ausente–. El argumento principal de su artículo, se centra en los límites del movimiento para asumir los cambios estructurales, alejarse de las demandas clasistas y configurar su propuesta en clave “etnicista populista”.

(...) endilgarle las reivindicaciones clasistas (al movimiento indígena) es pura fantasía; en realidad, esta organización carece de esos planteamientos y está muy lejos, como lo hemos mencionado, de recoger las reivindicaciones de sectores indígenas (en realidad un proletariado étnico) integrados en circuitos de explotación flexible, como el caso de las florícolas de la sierra. Al contrario, lo que ha predominado en el discurso de la CONAIE han sido el discurso etnicista, la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, mientras se dejaba de lado el análisis de problemas estructurales que afectaban no solo a los indios sino a los pobres rurales, como la concentración de la tierra, la explotación a la que son sometidos los nuevos asalariados rurales y los efectos negativos del minifundio, por solo señalar algunos. (...) “Saint-Upéry (2002), esboza la hipótesis de una exitosa mezcla entre demandas étnicas y clasistas. Por allí se podría indagar en futuras investigaciones una de las posibles explicaciones de la actual crisis, relacionadas con el **progresivo abandono de las clasistas y el privilegio de las étnicas**, las primeras con más posibilidades de consolidar alianzas que las segundas” (Martínez, 2005:138).

Martínez observa que en el avance del movimiento se privilegian las demandas “étnicas” que no recogen el conjunto de transformaciones estructurales en el campo (la

minifundización, la falta de tierra, las migraciones, la creciente integración al mercado, etc.), con esto no logra representar a su base social y política.

Los tres autores observan que el movimiento está impulsando/negociando con el estado una propuesta que pierde capacidad de transformar las estructuras de poder. Para Martínez está relacionado con que el movimiento deja de lado la agenda estructural (tierra, reforma agraria); mientras que para Hidalgo y Dávalos la agenda étnica pierde su sentido antihegemónico y se traduce en una agenda de derechos liberales de fácil asimilación por parte del estado.

### *Cambio de hegemonías internas*

Aunque este planteamiento está presente en varios de los autores anteriores que trabajan la diferenciación interna pues el cambio en la dirección del movimiento sería el resultado. Será, Simbaña (2007) quien observe con claridad que, pasada la expulsión de Lucio Gutiérrez y la emergente candidatura de Rafael Correa, la crisis del movimiento se caracteriza por tres procesos recientes: a) el desgaste de legitimidad provocada por la participación de la CONAIE en el gobierno de Lucio Gutiérrez, b) la debilidad e incoherencia de los dirigentes, y, c) lo que algunos califican de inclinaciones “etnocentristas” de la propuesta de Plurinacionalidad.

“Este movimiento general de la realidad y de sus condiciones económicas, políticas e ideológicas implicó que al interior de la CONAIE **la tendencia histórica sea desplazada de la mayoría de instancias de conducción**. La llegada de Antonio Vargas a la presidencia de la organización en 1996, y con él varios individuos y sectores de las organizaciones indígenas de la costa, amazonia y también de la sierra, contrarias a la tendencia históricas, expresa ese viraje. Esta **tendencia que se hizo representar por Vargas redujo el conflicto cultural a un problema étnico**, dándole a éste un rol que el proyecto de plurinacionalidad nunca contempló; de hecho el proyecto político de la CONAIE de 1994, plantea que el problema cultural es ante todo “un problema económico-político estructural, y por lo mismo un problema”; es decir que el problema cultural y reconstrucción de los pueblos indígenas se resolverá sobre una base material que cambie el sistema capitalista, por eso el proyecto político en su parte declaratoria define a la CONAIE como anticapitalista (Simbaña, 2007:web)”.



El autor observa que es un periodo en el que cambian las tendencias o *hegemonías* internas y de dirección política, el posicionamiento de una dirección “etnocéntrica” frente a los que habría sido una dirección “histórica” (un proyecto plurinacional de izquierda que entiende el proyecto plurinacional como una disputa cultural y estructural). El retorno de Luis Macas a la dirección de la CONAIE y de Humberto Cholango en la Ecuarrunari proyectaba un momento optimista porque anuncia el retorno de línea histórica. Sin embargo, la recuperación de la CONAIE no fue tan sencilla ni dependió solo de la dirección. Tiempo después, al reflexionar sobre sus propias hipótesis, dirá que “en ese momento se imaginaba que la fortaleza del movimiento podía recuperarse con la articulación de las viejas dirigencias de segundo grado, pero no fue así, la realidad interna había cambiado” (Floresmilo Simbaña, intelectual indígena, exdirigente de la CONAIE, Quito, 2018, comunicación personal).

#### *Fractura de la base comunitaria*

En el 2007, a diferencia de los artículos y trabajos anteriores que se centran en la coyuntura, José Sánchez Parga (2007) ensaya un libro donde pretende hacer un balance del movimiento y explicar su crisis<sup>6</sup>.

Para el autor el movimiento indígena es la expresión de un largo proceso de inclusión en el estado, desde el reconocimiento de las comunas con la ley de 1937 a la participación electoral con el Pachakutik; con lo cual, lo central y distintivo del movimiento es su base comunal que le imprime una forma política compleja y en muchas formas contradictoria. Así, el movimiento y las formas de acción política –incluyendo sus contradicciones– son la expresión político/estratégica de los cambios en su base comunitaria<sup>7</sup>.

“Esta crisis de los cabildos, que significa la crisis de las autoridades tradicionales de las comunas indígenas y sobre todo de su poder de convocatoria y de movilización, tendrá a mediano plazo serias consecuencias para los movimientos indígenas provinciales y el movimiento indígena a nivel nacional; ya que perderían su poder de influencia en las

---

<sup>6</sup> Una propuesta comparable es el trabajo de: Ospina, Pablo y Fernando Guerrero, 2003, “El Poder de la comunidad. Ajuste estructural y Movimiento indígena en los Andes ecuatorianos”, Buenos Aires, Colección Becas de Investigación CLACSO –ASDI. Pero su énfasis está centrado más en explicar los procesos de constitución y emergencia que en la crisis del momento.

<sup>7</sup> Una reflexión similar la plantea Víctor Bretón (2018) en su trabajo: La comunidad andina revisada: cuestión agraria y cuestión indígena en Chimborazo, Revista Ecuador Debate, No 103, pg. 159-173. Quito.

comunidades indígenas, al quedarse sin mediación de las autoridades tradicionales y más inmediatas representadas en los Cabildos. Lo que se perfila como singular escenario futuro es la múltiple desarticulación entre las comunidades y su dirigentes, entre estos y las OSG (Organizaciones de Segundo Grado locales) indígenas, entre estas y la CONAIE, entre estas y el Pachakutik” (Sánchez Parga, 2007:173).

Luego de una larga revisión de las transformaciones estructurales y las presiones que ejerce el capital sobre la comuna, regresa a la reflexión de la coyuntura en la que escribe (2003-2007). Para el autor, la crisis del movimiento es resultado de la conjunción de varios elementos que rompen con aquel núcleo central sobre el cual construye su fortaleza, la comuna: 1) el proceso de descomunalización y fractura de las relaciones sociales (tradiciones) que lograban algún control sobre el movimiento; 2) la bifurcación del movimiento en partido, lo cual resta fortaleza al movimiento; 3) el contexto político en el cual el neoliberalismo es una forma societal con la cual es imposible construir un espacio de representación política indispensable para el desarrollo del movimiento social –de este o cualquier otro–.

En ese contexto de cambios en la base comunal y avances en la inserción del movimiento en el Estado o de ampliación de su representación frente a la sociedad, sitúa la crisis como la articulación de distintas contradicciones que enfrenta el *movimiento indígena campesino comunitario*<sup>8</sup>.

- El movimiento demanda estado y reconocimiento en un contexto en el cual el estado se simplifica al punto en el cual le es imposible representar a nadie.
- Sus demandas se sitúan en el plano indígena campesino en un momento en las que las comunidades se descomunalizan y descampesinizan
- Con cierto esencialismo, el movimiento se opone a las formas institucionales de la política, pero él es al mismo tiempo, más estado, partido y gobierno<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> La referencia campesina en este texto es central, porque la crisis se configura en torno a la ruptura de condición comunitaria

<sup>9</sup> El autor se refiere a las nuevas instituciones, la participación electoral a través del Pachakutik y el asalto al poder.

- Para actuar como movimiento debe primero cambiar y lograr construir una forma que sea representable por la política nacional, dejar su condición particular para afirmar un proyecto universal
- Se construye en la crítica y radicalidad, pero es una propuesta que se desvanecen en las actuaciones políticas y negociación.

Podríamos decir que, la base comunitaria (campesina) que había sido el núcleo central de la fortaleza del movimiento, no es suficiente para empujar un proceso de inserción estatal que mantenga la integridad e identidad del movimiento. Podríamos decir que la crisis expresa también el largo proceso de descomunalización que el capital exige a la sociedad campesina para su “inserción” o subordinación en la sociedad moderna<sup>10</sup>.

### **Los primeros signos del problema**

En esta primera parte, la mayor parte de trabajos, si bien observan la crisis del movimiento, reconocen y resaltan su importancia en el escenario político. A pesar de que el movimiento muestra signos de debilidad, hay expectativa de que el movimiento mantenga su fortaleza y centralidad política. Una de sus características es que son debates e interpretaciones del momento, en una coyuntura en la que el movimiento, de manera conflictiva y contradictoria, avanza y se moviliza. Los trabajos atrapan los signos de la crisis, pero no tienen como objeto explicarla. No necesariamente dialogan entre sí o con las hipótesis de la emergencia del movimiento; y en conjunto, no permiten construir una mirada comprensiva de una crisis en “movimiento”.

Sin embargo, como ejercicio de sistematización y ordenamiento del debate, ubicamos seis puntos de reflexión, tres de los cuales son parte de una proceso más general, la diferenciación interna:

- *la fractura de la base comunitaria.*
- *diferenciación política,*

---

<sup>10</sup> Marx definirá a ese fenómeno como el proceso de subsunción real que culmina, no solo con la incorporación violenta de las poblaciones a la producción de mercancías, sino, la construcción de una subjetividad capitalista (individuación e incorporación de valores capitalistas) y su participación activa.

- *complicidad de la dirigencia,*
- *cambio de hegemonía interna, y*
- *cooptación externa,*
- *los límites del proyecto,*

Ejes desde cuales intentaremos caracterizar la crisis del movimiento antes de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana.

Para empezar, aunque son pocos los autores que ubican con claridad los efectos del desarrollo del capitalismo en el campo (Martínez, 2004; Sánchez Parga, 2007), la gran mayoría de autores tienen de fondo y contexto en avance del neoliberalismo, el cual está representado como crisis política y cierre democrático. Aquí, el texto de Sánchez Parga sitúa al capitalismo como el motor del proceso de *descomunización*, con este, la diferenciación económica y diferenciación política.

Es decir que, antes del gobierno de Correa, el movimiento indígena, en tanto que representante de una sociedad *indígena campesina comunitaria*, vive y expresa un proceso de cambios estructurales que transforman y debilitan las estructuras de su base social, la comunidad indígena campesina. La referencia a la condición campesina e indígena resulta central porque si bien las diferenciaciones política y la construcción de tendencias políticas al interior de las organizaciones sociales es un fenómeno “natural”, en el caso de las sociedades rurales, este es un proceso complejo y de largo aliento que incluye la ruptura de las tradiciones y la construcción de una conciencia individual.

Hacia el 2006, el movimiento indígena era una organización con estructuras regionales y locales, era el núcleo de articulación para el resto de movimientos sociales y había ampliado su estrategia de intervención gracias al trabajo de varias camadas de dirigentes<sup>11</sup> que fueron el resultado y efecto de la “institucionalización del movimiento”, sobre todo gracias al apoyo de las ONG, la expansión de la educación intercultural, el impulso de instituciones propias dentro del estado, la participación electoral, el acenso económico y la profesionalización de la población.

---

<sup>11</sup> Mientras que Sánchez Parga (2007) ubica el proceso en la Ley de Comunas de 1937; Ospina y Guerrero (2003) lo ubicarán en la lucha por la tierra y los procesos de reforma agraria de los años 50; y Mark Beker (1999) en cambio lo sitúa en la conformación de la FEI en 1926.

Tras la *diferenciación política* (lo cual supone un proceso de diferenciación económica), las nuevas camadas construyen otros intereses y articulaciones que disputan la dirección del movimiento y tienen la posibilidad de cambiar la “hegemonía interna” del movimiento. Un proceso que se expresa como nuevas tendencias o sectores, que están representados en el “indigenismo puro” de Macas (2000), en las “posiciones etnocéntricas” y en la “línea histórica” de Simbaña (2007).

Lo cierto es que el movimiento indígena, a las puertas del gobierno de Correa, se había convertido en una estructura compleja, donde el proceso de cooptación por parte de las ONG (Bretón, 2001), la acción deliberada de actores externos (Guatemala, 2006) y la participación en las nuevas instituciones, lograron cambiar los intereses de las dirigencias, entendida por Santana (2004) como “complicidad con las elites”. En el centro del argumento, los autores nos muestran un cambio de *subjetividad* de la dirigencia, asociado a los cambios estructurales en el campo. Pero el cambio de intereses de los dirigentes, no solo se produce por la acción de actores externos, sino por las crecientes migraciones, el acenso social de la población, el proceso de urbanización, la profesionalización, etc.

En algunos aspectos y con varios matices, Hidalgo (2003), Martínez (2005) y Dávalos (2006), aciertan al plantear que el proyecto político del movimiento indígena (las demandas étnicas o estado plurinacional), hacia el 2006 resulta insuficiente para recoger la nueva complejidad del movimiento y lograr mantener su radicalidad y antagonismo frente al neoliberalismo, el estado y la coyuntura. Tal como lo plantea Sánchez Parga (2007), hacia el 2006 el movimiento indígena era una organización de base comunal sobre la cual pesaba una serie de procesos que tienden a debilitarla, desde las transformaciones de su base social a la disputa de su acción electoral, pero en su momento guardaba la fortaleza organizativa para mantener su centralidad política.

Al inicio del gobierno de Rafael Correa ya estaba instalado el debate en torno a la crisis del movimiento indígena y su elemento más claro era la creciente disputa por la dirección del movimiento y los límites de su inserción en el Estado. Sin embargo, la disputa y negociación de las organizaciones, así como la falta de movilización, era un común a todos los movimientos sociales.

En este sentido, entre los artículos revisados para ubicar el estado de arte de la crisis nos llama la atención dos elementos:

Por un lado, la gran mayoría de textos, ponen énfasis en la fenomenología del actor en una coyuntura que va del 2000 al 2006, en donde “la crisis” del movimiento se produce como resultado de su auge y éxito, y en donde la acción electoral/parlamentaria se combinaba con la acción en las calles. Tal como lo plantea Ospina (2006 y 2009) y Ramírez (2009), es una crisis en la cual si bien no se desvanecieron las bases sociales de la movilización y el antagonismo político, se perdió la capacidad de interpelación hacia la multiplicidad de otros actores y la resistencia plebeya.

“La estructura de la CONAIE es todavía una formidable federación descentralizada de organizaciones de base que en conjunto ocupan entre 100.000 y 150.000 familias. ¿Qué organización sindical, política o de cualquier otro tipo puede ostentar una red organizativa tan formidable?” (Ospina, 2009:124)

Por otro lado, debido al carácter coyuntural de la crisis y el proceso político reciente, con excepción de Sánchez Parga (2007), Ospina (2009) y Ramírez (2009), la mayor parte de textos dejan de lado en el balance los núcleos del proceso que dieron origen a la fortaleza y capacidad de representación del movimiento indígena frente a la sociedad. Así como, lo advierte Ospina (2009), no consideran los factores estructurales que en otros momentos promovieron la movilización social, la crisis económica, la falta de trabajo, etc.

## **La crisis en la “revolución”**

Pasada la coyuntura de Gutiérrez (2003-2005), los procesos de movilización social no desaparecieron, los movimientos indígenas campesinos dieron una dura batalla frente al TLC (2005) y los sectores medios tuvieron un protagonismo destacado en la expulsión de Lucio Gutiérrez y ascenso de la Revolución Ciudadana (2007-2017).

Pero con Rafael Correa el escenario cambió, inicialmente su propuesta canalizó la simpatía del conjunto de actores movilizados en la década, incluyendo el movimiento Indígena y el PK y, aunque no lograron una alianza electoral; las organizaciones de base demandaron votar por Correa, el Pachakutik apoyó en el Congreso la conformación de la

Asamblea Nacional Constituyente (2008), las organizaciones se movilizaron para canalizar sus demandas en la Asamblea y luego participaron activamente en la promoción de SI para el referéndum de aprobación de la nueva Constitución.

Además, intentaron mantener la movilización en las calles a través de su apoyo a las demandas de las organizaciones enfrentadas a la expansión de la frontera minera y petrolera –aunque hay que reconocer que muchas de las movilizaciones de aquel momento fueron procesos que estaban por fuera de la Conaie, porque el grueso de afectados por la minería no estaban en las bases más importantes de la organización–.

Inicialmente, los discursos del nuevo gobierno y la nueva Constitución (2008) crearon una enorme expectativa que sirvió para negociar las demandas de las organizaciones, pero en la medida en que el gobierno avanza, las organizaciones indígenas y campesinas se fueron fragmentando entre las que apoyaban al régimen y las que entraban en oposición.

Tempranamente la CONAIE se convirtió en uno de los actores más importantes de la oposición social y política:

- Las organizaciones indígenas y campesinas del país (FENOCIN, CONAIE, ECUARUNARI y Mesa Agraria, presentaron el 10 de julio de 2008 una propuesta de Mandato Agrario Alternativo que apuntaba al problema de la comercialización.
- Entre diciembre 2008 y enero 2009 se producen movilizaciones importantes frente al Proyecto de Ley Minera presentado por el gobierno. Unas 12.000 personas pertenecientes a movimientos indígenas, ecologistas, campesinos y de defensa del agua de ocho provincias participaron en lo que se conoció como “Día de Movilización por la Vida”.
- En septiembre del 2009, grupos indígenas protestaron contra el proyecto de Ley de Agua que se había presentado a la Asamblea Nacional sin que se hubiera realizado una consulta previa. En Macas, el enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó más de 40 heridos. Un profesor indígena, Bosco Wisuma, recibió un disparo y murió en las protestas. El proceso abrió el diálogo entre la CONAIE y Presidente, acordaron lograr un consenso respecto al proyecto de Ley de Aguas, debatir las propuestas de los pueblos indígenas en torno a la Ley de Minería y establecieron una Comisión de la Verdad conjunta.
- En mayo del 2010, se produce una nueva “oleada” de protestas, cuando llegó el momento de someter la Ley de Agua a votación en la Asamblea Nacional. Carlos Pérez Guatambel, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay. Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de la comunidad de San

Joaquín, fueron detenidos y acusados por sabotaje, y luego por el delito penal de obstrucción ilegal de vías, pagaron una multa de 3000 dólares.

- En junio del 2010, Marlon Santi y Delfín Tenesaca, son acusados de terrorismo, y se abrió una investigación por las protestas realizadas frente a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), realizada en OTAVALO.
- El 7 de febrero del 2012, las organizaciones de los pueblos afectados<sup>12</sup> emitieron un comunicado en el que exigen que se deje sin efecto la licitación de los 21 bloques de la Décima Primera Ronda Petrolera.
- 22 marzo de 2012, estalló un proceso de movilización nacional contra minería, en una marcha por el agua y la dignidad de los pueblos en la que participaron unas 70 mil personas.
- En el 2012, también se abrió el proceso de consulta pre legislativa para la Ley de Aguas, que se inició en 2012 y concluyó en el 2016, y contó con 1.631 organizaciones y la asistencia de la CONAIE
- En junio del 2012 la CONAIE, FENOCIN y FEINE abren la posibilidad de hacer un frente único por la ley de tierras. Finalmente la Fenocin Presentó una propuesta de ley de 40.000 firmas, y la Asamblea Nacional Constitucional abriría un proceso de consultas prelegislativas en las que el número de participantes fue de 490 inscritos validados, sin la CONAIE
- En el 2013, se plantean una alianza Plurinacional de las Izquierdas con Alberto Acosta como candidato, y aunque solo logró el 2% de las votaciones, PK consigue 26 alcaldías y 3 concejos provinciales.
- En agosto de 2015 se producen movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sindicatos. En esa jornada 29 personas fueron detenidas en Saraguro por lo que se les llamó los “29 de Saraguro”.
- El 22 de junio 2015 se desarrolla la Cumbre Agraria luego de varias cumbres provinciales.
- Entre Junio del 2016 y 2017, la CONAIE tramita el indulto y amnistía para 225 dirigentes criminalizados

Así, en el proceso de oposiciones al gobierno de Rafael Correa y de rupturas de las organizaciones indígenas, se producen “nuevas” interpretaciones en torno a la crisis del movimiento indígena.

### *Modernización de la comunidad andina*

---

<sup>12</sup> “La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nacionalidad Shiwari del Ecuador (NASHIE), la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE), la Nación Shuar del Ecuador (NASHE), el Pueblo Ancestral de Huito, el Pueblo Kichwa de Sarayaku, la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE), la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia.



Luis Tuaza (2009 y 2011), en una antropología política de las comunidades de Columbe, hace un esfuerzo interesante por explicar la crisis del movimiento, en un primero momento, siguiendo los trabajos de Bretón en relación a los límites de las intervenciones de desarrollo y argumenta que; resultado del exceso de acciones, actividades o trabajos que demandan las ONG y los municipios, las organizaciones (las comunidades de Columbe) están cansadas y no tienen ganas de movilizarse pues no cambia su vida. Además, recoge un testimonio en cual observa que tras el vacío dejado por la eliminación del poder gamonal o la hacienda, se ha levantado un *nuevo régimen de control*: una nueva dirigencia de indígenas que ha desplazado al viejo régimen, entre ellos los evangélicos que tienen un enorme poder para definir las inversiones del Gobierno Local y nuevas estructuras de clientelas políticas.

“Se cree que en las comunas todo funciona a perfección. En los análisis que se hacen de las comunidades hay un cierto “romanticismo étnico” del que nos habla Andrade (2004), pero la vida cotidiana de las comunas reproduce aún el sistema hacendatario de los años cincuenta, con la diferencia de que los antiguos mayordomos y mayores han sido desplazados por los dirigentes que, en algunos casos, son descendientes de los mayores que tenían el control sobre los huasipungueros” (Tuaza, 2009: 138).

En el 2011, en medio de los años de mayor popularidad e inversiones del gobierno de Rafael Correa, expone una reflexión más acabada que en el 2009 y critica el romanticismo en torno a la comunidad y la organización indígena, planteando el rol de control que ejerce la dirigencia sobre la población –valga decir que, si bien tiene otro enfoque, en ese momento es un argumento levantado por el mismo presidente Rafael Correa en su estrategia de desprestigio de las organizaciones-.

“Con la desaparición parcial de las haciendas, de alguna manera, se acabaron los *jipus*, no obstante, **ciertos dirigentes** actuales son descendientes directos de los *jipus* que en algunos casos maltratan a los comuneros. “El abuelo del actual presidente, era *jipu*, era malo, pegaba, insultaba a la gente con tal de quedar bien con el amo. El papá también heredó las costumbres de ser *jipu*. Ahora **el nieto también vive no más haciéndose de presidente, imponiendo fuerte multa**”, sostienen los moradores de Miraflores. Una vez anuladas, de cierto modo, “las relaciones interétnicas desiguales” (Burgos, 1977) se dio paso a la desaparición de los *killkakkuna* tradicionales, no obstante, aparecen nuevos *killkakkuna* revestidos con la potestad de los estudios y la técnica, amparados en las

buenas nuevas del desarrollo, con capacidad de influencia en las instituciones del Gobierno y en los organismos de cooperación. Estos son **ciertos líderes indígenas que han cursado estudios superiores o a su vez, ingenieros y técnicos de las ONG** que sienten tener la noble misión de conducir al paraíso terrenal preparado por la ejecución de los proyectos de desarrollo. “El director de la institución nos ofreció ayudar con un proyectito. Hicimos la petición, pero rechazó porque nos dijo que estaba “mal escrito”. Por eso venimos, donde usted, señor ingenierito que nos dé escribiendo bien”, expresaron los moradores de Chawpi San Antonio (2009), al técnico de Plan Internacional” (Tuaza, 2011: 60).

Tras una larga reflexión sobre los cambios en la comunidad, describe una nueva realidad, en la cual las comunas van perdiendo autonomía económica (dependen más de la migración que de la agricultura), su autoridad colectiva entra en disputa con las iglesias evangélicas y las juntas parroquiales, a su interior se han multiplicado las organizaciones e instituciones que ordenan la vida cotidiana; y, **si en los años posteriores a la reforma agraria, el vacío creado por la ausencia del poder gamonal permitió mayor movilización de la sociedad, en el último periodo hay una recomposición del régimen de control en manos de los mismos indígenas.**

Además, el autor ubica los procesos de descomunización, y sitúa que las organizaciones de base han perdido interés en relación con las organizaciones de segundo grado pues estas no logran canalizar sus expectativas,

A mi modo de entender, en el caso de las organizaciones y comunidades de Columbe y el movimiento indígena ecuatoriano existe un cierto agotamiento, por cuanto que las organizaciones no cumplen con las expectativas de la gente y las dinámicas de funcionamiento de estas organizaciones están al margen de las decisiones de las bases. En este sentido, María Guaraca (2009) sostiene, “al menos **antes valía la pena ser parte de la organización. Recibíamos tierras, ayudas, agua potable y letrinas. Ahora nada.** Ni conocemos qué organizaciones habrán, sólo sé que andan diciendo que dan beneficios a los indios”. Simultáneamente se puede observar el fraccionamiento de las organizaciones a nivel de base, las OSG y en las organizaciones nacionales: CONAIE, FEINE, FENOCIN, tal como se explicará más adelante (Tuaza, 2011:189).

La falta de interés por la organización en ese momento es el resultado del accionar del mismo Estado pues son los múltiples programas de (bonos, crédito, vivienda, etc.) y sus instituciones las que facilitan el acceso a recursos, y no el rol de intermediación que realizaban las organizaciones de segundo grado,

“La situación del movimiento indígena ecuatoriano en la era de la revolución ciudadana es ambigua, por un lado existe la permanente confrontación entre el Gobierno y la CONAIE, pero por otro lado, **la mayoría de las OSG y organizaciones de base en caso de Chimborazo respaldan mayoritariamente las acciones del Gobierno.** A nivel de las bases **las políticas públicas del Gobierno orientadas al sector rural, posibilitaron la reintegración y fortalecimiento de las organizaciones, tanto comunitarias y parroquiales, al mismo tiempo se multiplicó el número de organizaciones,** esto porque como se ha descrito anteriormente, el Gobierno exige que los beneficiarios de los distintos programas de intervención estén coordinados y respaldados por una organización. Asimismo, **los proyectos gubernamentales han servido de estímulo para la formación de nuevas organizaciones** como es el caso de la Unión de Organizaciones Populares del Ecuador (UOPE), que paulatinamente se ha ido constituyendo en una **organización de alcance regional bajo el amparo gubernamental, en competencia con la CONAIE,** provocando de este modo el debilitamiento de esta organización, el fraccionamiento y la separación de ciertas organizaciones como la Unión de Cabildos de San Juan (UCASAJ) y el Inca Atahualpa de COMICH y ECUARUNARI” (Tuaza, 2011:335).

Por otro lado, está el peso de las organizaciones que el gobierno promueve en la búsqueda de legitimar su acción política. A esto se suma un fenómeno que contradice todo universalismo que pretende la política ciudadana; en términos de E.P. *Thompson*, *las inversiones tienden a cambiar las “lealtades” de organizaciones de base gracias a un nuevo pacto en donde funciona el intercambio de “dones”, muy propio de la “economía moral”*.

(...) “¡Correa sí cumple con su palabra!” manifiestan los miembros de la comunidad Pucará (2010). “Gracias a la ayudita que da el Gobierno mensualmente recibo el bono, con eso me mantengo sino que fuera” señala María Pilamunga (2009). En definitiva, las políticas de Gobierno son consideradas como las dádivas que vienen de lo alto, por lo que los beneficiarios **están en la obligación de demostrarle la gratitud y lealtad.** “El

Gobierno se preocupa por nosotros, tenemos que ser agradecidos” es la exhortación que dirige el presidente de la comunidad de Tanquis a los miembros de su comunidad. **En esta situación de intercambio de dones y la práctica de la reciprocidad Gobierno e indígenas** o viceversa, al parecer no hay opción al debate en torno a los derechos. Los indígenas acceden a los beneficios ofrecidos por el Gobierno en virtud de su condición de pobre, pero no en calidad de ciudadanos ecuatorianos. **Dado que es un favor que se recibe, no puede reclamarles, cuestionarles, porque en el momento que esto ocurra corre el riesgo de quedarse al margen de la providencia presidencial.** Este es el temor que aparece en las comunidades. En la movilización indígena de diciembre de 2009, los miembros de las comunidades de Columbe, no salieron al paro por temor de no recibir las casas de MIDUVI. La concepción de la acción gubernamental en la perspectiva de la caridad cristiana o altruismo humanista se hace patente también en ciertas expresiones de los funcionarios del Gobierno, “no importa la lluvia, el frío nosotros estamos para ayudarles, porque esto es nuestro deber” (Solís, 2010)” (Tuaza, 2011:336).

Finalmente, gracias al interesante trabajo de campo, la observación de procesos y abundantes testimonios de dirigentes y comuneros; hacia el **2011**, el autor muestra que el gobierno, gracias a las inversiones y el nuevo rol del Estado, logró cambiar la lealtad de las comunidades y promover nuevas coaliciones locales que legitimaban la acción del gobierno. Valdría decir, que tal fenómeno tiene que ver con la administración de las escasas y necesidades de las comunidades, más que con un cambio ideológico político, tienen que ver con los límites de las OSG para intermediar con los recursos del Estado.

Francisco Gachet, en el **2013**, un periodo en el cual las tensiones entre la CONAIE y el gobierno van en ascenso resultado de las disputas en torno a las leyes de Tierra y Agua; desarrolla su trabajo de campo en las Comunidades de Guangaje, observa un fenómeno similar al planteado por Tuaza: las inversiones del gobierno han logrado que las organizaciones de base estén menos dispuestas a la movilización social.

“Esto (inversiones en la zona) podría explicar parcialmente las razones por las que no existe una oposición expresa de la población de Guangaje frente al gobierno, a pesar de que las posturas opositoras del Movimiento Indígena Ecuatoriano sean constantemente socializadas en la parroquia. **La pasividad de estos sectores en las movilizaciones por el agua en marzo de 2012 podría derivarse de estas respuestas estatales a ciertas necesidades locales.** Y es que a pesar de que las demandas campesinas en el occidente

de Cotopaxi no sean escuchadas por el gobierno, las políticas estatales si estarían enfrentando demandas también presentes en la actualidad de varios espacios rurales de la provincia. Los proyectos turísticos, la renovada infraestructura vial entre Latacunga-La Maná que agiliza la movilización interna de la población, así como los diferentes intentos por mejorar las condiciones laborales en la construcción y en la fabricación de bloques momento mencionó la necesidad de promover una verdadera reforma agraria como lo hicieron los estados asiáticos” (Gachet, 2013:115).

Si bien el trabajo de Gachet no tiene como objeto pensar “la crisis”, indaga la relación entre la transformación agraria y las formas de representación política, en este caso observa que las redes familiares de acumulación local cambiaron, si antes estaban ligadas a la agricultura, hoy están relacionadas con la migración y la construcción. Los procesos de diferenciación social transforman los intereses de las comunidades y los escenarios para la dirección del MICC.

Hemos visto que el Movimiento Indígena fue capaz de articular la acción colectiva en escenarios de fragmentación laboral, en la medida en que las migraciones internas y los procesos de semiproletarización y diferenciación del campesino indígena en la Sierra centro norte del Ecuador fueron anteriores a la etapa neoliberal. Lo que se podría plantear como hipótesis es que **el proceso de profesionalización de las bases fragmentadas del movimiento indígena, la consolidación de nuevas jerarquías internas en las comunidades, así como las nuevas formas de construir y sostener posiciones de prestigio social intraparroquial derivadas de las diferenciaciones de clase**, son consecuencias históricas y sociales que están desestructurando paulatinamente al movimiento desde adentro. Quisiera añadir en mi argumento que otro de **los retos políticos que plantean los procesos de diferenciación y fragmentación laboral para las estructuras organizativas del movimiento es la incorporación de las necesidades y demandas de estos sectores desde las organizaciones de Segundo Grado**. Incorporar una autoridad parroquial específica que acompañe a los migrantes temporales e interceda en sus conflictos particulares (por ejemplo, presionando a ingenieros o arquitectos por el pago de salarios atrasados) podría dar paso a un proceso efectivo de rearticulación política y lucha por mejorar las condiciones laborales del trabajo precario en la industria de la construcción. Lo importante de estas decisiones es que logren mantener un equilibrio tal, entre demandas campesinas y obreras, que les permita sostener la cohesión interna del movimiento al tiempo que mantengan la demanda y la presión política por un nuevo y

real proceso de redistribución de tierra, agua y medios de producción en el agro, en beneficio de las economías campesinas.

Así, el autor observa que además de los efectos desmovilizadores de las inversiones del estado se refuerzan problemas anteriores al gobierno, relacionados con un cambio en la estructuras de base que tienen nuevas demandas que no se ven representadas en la agenda indígena campesina del movimiento.

Santiago Ortiz (2013), preocupado por la comunidad indígena y el comportamiento del voto que se desplaza hacia el apoyo de Rafael Correa, hace un estudio comparado en dos municipios que hasta las elecciones del 2009 fueron bastiones del Pachakutik, Cotacacahi y Otavalo.

“Este estudio plantea que el respaldo logrado por Correa se explica por varios factores. El primero proviene de una relación histórica comuneros-Estado por el acceso a recursos. En segundo lugar está el **comportamiento electoral pragmático de los indígenas**, que sin renunciar a sus representantes étnicos, optan por participar en movimientos políticos viables para tener nexos con el poder. Finalmente, porque en el imaginario indígena —a diferencia de la propuesta neoliberal de menos Estado— hay la expectativa de más Estado, en tanto este asegura mayor acceso a los servicios públicos.” (Ortiz, 2013:84)

De los elementos que el autor plantea resaltan la racionalidad pragmática y la demanda de Estado, para el autor, el giro del voto hacia Correa no es un problema “ideológico”, sino que la “comunidad” no es la misma que hace 20 años y los cambios producidos, el trabajo comunitario apoyado por la política pública (salud, educación, vías de comunicación, etc.), han enlazado sus perspectivas y demandas con la posibilidad de resolverlas a través del Estado; la racionalidad pragmática se entiende como la búsqueda de opciones políticas que garanticen su acceso a los recursos del Estado. Podríamos decir que en una coyuntura donde el PK no puede garantizar el acceso y vínculo con el Estado, las comunidades optan por votar por PAIS.

Además, aunque el trabajo no lo dice, muestra que las relaciones entre comunidad y organización, comunidad y movimiento, así como comunidad y partido (PK), si bien son pragmáticas, se sostienen en una condición comunitaria e identitaria.

### *Límites organizativos (fin de la centralidad política)*

En el año **2009**, en medio del ascenso de la Revolución Ciudadana, Ramírez (2009) plantea que los límites del movimiento indígena, a pesar de su éxito e importancia en la reconstrucción del campo político de izquierda, está relacionada con la falta de “institucionalidad”<sup>13</sup>. Tras la revisión de los distintos momentos de la acción política, el autor observa que en el caso del movimiento indígena hay una indefinición y ambigüedad en la relación entre la Conaie y el Pachakutic, resultado de una *institucionalización difusa*, la cual es producto de su propia historia y proceso (un partido que nace como una unidad plural, un movimiento que en sí mismo es una enorme diversidad, una estrategia dual de crítica y participación en el estado, la dispersión territorial y la diversidad étnica, diferentes tendencias políticas internas<sup>14</sup>), una heterogeneidad política que no logra una distinción clara entre el PK y el MI. Según el autor,

La indefinición y la ambigüedad habrían limitado la capacidad de maniobra al PK en la articulación política y de acción parlamentaria, facilito la penetración estatal de las organizaciones y acelero el desgaste del conjunto del movimiento en medio de una crisis que pulverizó la legitimidad de todo actor político (Ramírez, 2009:66)

La complejidad y heterogeneidad de escenarios políticos que el movimiento empezó a copar –acción legislativa, gobiernos locales, burocracias étnicas, y ejercicio de gobierno– no se correspondió, sin embargo, con la resolución de sus dilemas de institucionalización interna ni con la definición de un programa político que moderara las tensiones entre sus vertientes “eticistas” y “pluralistas”. A medida en que se acrecentaban los nexos con las agencias estatales (especialmente el gobierno de Gutiérrez), la fragilidad de los mecanismos de coordinación colectiva **estimuló la negociación directa entre cada organización indígena y los gobiernos de turno, Ni el PK ni la CONAIE eran ya los únicos canales de interlocución política e intermediación con los recursos del Estado** (Ramírez, 2009:91).

---

<sup>13</sup> Según el autor, Claus Offe plantea cuatro momentos del procesos de institucionalización: a) acción contenciosa, b) desgaste de la acción, c) evaluación y ajuste de la estrategia / institucionalización que implica un desgarre interno –no necesariamente ruptura, y d) una incorporación exitosa –en caso de serlo- sin perder la identidad política.

<sup>14</sup> El autor ubica cuatro polos que disputan internamente la CONAIE: Etno-pragmáticos, etno-doctrinarios, etno-radicales y neo-leninistas indigenizados

Para el autor esta *institucionalización difusa*, abrirá el espacio de intermediación con el estado y la sociedad que hasta hace poco era un lugar ocupado por el MI y el PK, la falta de institucionalidad, es la incapacidad de controlar las crecientes diferencias internas del movimiento indígena y el PK, y los distintos actores o fracciones políticas que negocian con un estado que también carece de fortaleza institucional. Y en el marco de la emergencia del gobierno de Correa, el autor anuncia que ese espacio de intermediación política que había sido ocupado el movimiento indígena y los movimientos sociales se debilitaba y es un terreno a ser ocupado por una *izquierda sin movimientos sociales* representada en el proceso de la “Revolución Ciudadana” (Ramírez, 2009:90-93).

En el mismo año, Ospina (2009) propone una lectura situada de la crisis, es decir, una lectura desde las necesidades y complejidad del movimiento. Observa que es necesario relativizar la crisis, pues pasada la coyuntura con Lucio Gutiérrez, en el 2006 frente al TLC, las movilizaciones del 2007 y el 2008 frente a la Constituyente el movimiento indígena mostró que aún guardaba fortaleza organizativa y mantenía la centralidad política para muchos de los movimiento sociales; además, mantenía su fuerza electoral territorial.

“La estructura de la CONAIE es todavía una formidable federación descentralizada de organizaciones de base que en conjunto ocupan entre 100.000 y 150.000 familias. ¿Qué organización sindical, política o de cualquier otro tipo puede ostentar una red organizativa tan formidable?” (Ospina, 2009:124)

Tras una breve descripción de las distintas percepciones que existen sobre la crisis del movimiento, el autor organiza el debate en tres grandes carriles; 1) la participación electoral y burocratización del movimiento; 2) las intervenciones de las ONG y la cooperación al desarrollo tras el fenómeno de la cooptación; 3) las políticas de alianzas políticas y electorales (alianza con Lucio Gutiérrez) (Ospina, 2009:129). Sobre las distintas lecturas observa que todas hipótesis son insuficientes para explicar la crisis del movimiento, y que cada una de estas acciones dependen de las condiciones en que se dieron para generar su crisis y ofrece una tesis alternativa:



Por un lado observa que el movimiento, a pesar del éxito y la fortaleza, **no logró la fuerza y alianza territorial suficiente para llevar adelante los elementos más radicales y complejos de sus propuesta**, con lo cual, la política de alianzas y la negociación fue siempre una necesidad, y sus victorias fueron avances parciales, trascendentales pero parciales. Por otro lado, entre los años 80 y mediados del 2000 la sociedad a la que representa cambió (descomunalización, descampesinización, diferenciación social, diferenciación política) y, en el escenario político que el mismo movimiento produjo, gano en un enorme éxito, pero también complejidad (movimiento y partido, gobiernos locales, instituciones estatales, alianzas, etc.), frente a lo cual, **la estructura del movimiento (CONAIE y PK) resultaron insuficientes para lograr gestionarla el conjunto de problemas y de tensiones.**

Lo que ocurrió es que cuando la CONAIE adquirió una significativa cuota de poder político y este poder se tradujo en capacidad de negociación y en el manejo de instituciones públicas, varios de los factores que antes habían sido ventajas, se convirtieron en desventajas. De forma más específica, **la estructura y forma de funcionamiento de la CONAIE no fue capaz de adaptarse a las nuevas tareas, responsabilidades y exigencias que su nuevo papel político le imponía** (Ospina, 2009:133).

Para el autor, tanto la participación electoral, el vínculo con las ONG y las alianzas con otros sectores, en su momento y condiciones específicas fueron procesos importantes para la acción y crecimiento del movimiento. Sin embargo, el contexto cambió, como cambiaron las relaciones con otros sectores. El escenario y proceso político se hizo más complejo y el movimiento, su estructura y funcionamiento, no tuvo la capacidad y fortaleza de ordenarse para contener los procesos que el mismo produjo. Sobre el movimiento crecieron las demandas de sus bases y las demandas de otros actores que encontraban en el movimiento la posibilidad de canalizarse, pero el movimiento no disponía de la capacidad de procesar el conjunto de demandas.

#### *Débil coalición política*

Stalin Herrera, **2017**, tras una revisión de las disputas entre el movimiento y el gobierno de PAIS y las estrategias desplegadas para contener a las organizaciones, plantea que, a pesar de la fortaleza del gobierno, su “hegemonía” es inestable y sin consensos. Por otro

lado las organizaciones sociales a pesar de sus esfuerzos y acciones políticas desplegadas, no tienen la fuerza para cambiar su escenario,

Las organizaciones sociales han optado ocupar las calles como espacio de presión al Estado y demostración de articulación organizativa. Sin embargo, aunque tienen mucha vitalidad y capacidad de reacción, también fue claro que no tienen la fuerza para revertir la acción gubernamental. Aunque han logrado algunas alianzas y conquistas, ha perdido muchas más batallas frente al gobierno. Su estructura organizativa existente no da signos de renovar su estrategia y programa; la unidad en las calles y la suma de demandas fue una posición estratégica que les permitió acumular fuerzas, pero no lograron elaborar una propuesta que les permita re-articular los sentidos progresistas de la sociedad en la perspectiva de levantarse como una opción política electoral. En esas circunstancias, **el asedio al gobierno de Rafael Correa configuró la política de los movimientos sociales y se convirtió en un horizonte práctico, carente de programa y de proyecto, y por tanto de alternativa.** En apariencia, a los movimientos sociales les quedarían fuerzas para contener unas pocas reformas legales y disputar las calles, el problema de esto es que, no sabemos cuánta fuerza tengan para contener las intenciones de la derecha, que se muestra decidida a recuperar la dirección política del Estado y disputar la dirección moral en las calles. (Herrera, 2017, mimeo)

En este caso, la crisis del movimiento es vista como representación de la débil coalición de fuerzas. Si bien hay fortaleza para mantener la acción política, estas son débiles y coyunturales, en el marco de la debilidad popular, las fuerzas condicionan su acción en una *estrategia de asedio* al gobierno.

### *Contención política*

Jonas Wolff (2011), sugiere que la crisis ha sido “impuesta” y se ha producido un *cercamiento del movimiento* que se desarrolla,

"(...) por tres procesos interrelacionados: a la *integración política*<sup>15</sup> en el sentido de una mayor participación, representación y *responsividad*; a la cooptación de líderes, grupos y organizaciones (de base) indígenas por instituciones estatales y partidos políticos; y a

---

<sup>15</sup> Según el autor, siguiendo a Tarrow, “La integración política del nuevo grupo implica su institucionalización, su moderación estratégica y la desmovilización de su base social” (Tarrow, 1998: 161-175, en Wolf, 2011:285).

dinámicas internas –de división y desmovilización– del propio movimiento indígena." (Wolff, 2011:282)

Contradictoriamente, en su argumento está la idea de cooptación desarrollada por actores externos al movimiento (gobierno de Gutiérrez), pero lo interesante del trabajo es que durante la presidencia de Gutiérrez, **las divisiones internas y la negociación con el gobierno se producen en todos los niveles, incluyendo las bases y las organizaciones locales que demandan resultados y presionan por negociaciones concretas.** En cambio, a nivel nacional se acentúa la *competencia entre las organizaciones* (FENOCIN, FEINE, CONAIE). Una disputa interna y competencia por la representación que desde el gobierno se aprovecha para fracturar el movimiento y cambiar de aliados políticos. En este sentido, el movimiento no es solo heterogéneo, sino que *sus decisiones* locales y nacionales resultan ambivalentes y contradictorias.

En medio de la aún alta popularidad de la Revolución Ciudadana, Herrera, Latorre, Iturralde y Sánchez, en el **2013** observan que el gobierno, en el marco de importantes inversiones sociales, promovía la creciente acumulación y ganancia de las empresas. Tal proceso, partir del análisis de los datos de Observatorio de la Conflictividad Social del CAAP, venía acompañado de un incremento de la conflictividad social que: 1) a diferencia del neoliberalismo era más alta y se producía como resultado del auge económico y no de la crisis; 2) había un desplazamiento hacia los conflictos territoriales resultado de su propuesta extractivista; 3) el gobierno privilegiaba la resolución de los conflictos con las cámaras y gremios, al tiempo que rechazaba los conflictos con indígenas, campesinos y trabajadores; y 4) se observaba además que los trabajadores, indígenas y campesinos tenían mayor dificultad para hacer de la conflictividad una plataforma de disputa nacional. Lo que estaba de fondo en el giro territorial, era un cambio geográfico de las bases sociales de la movilización que hasta años anteriores se habían concentrado en la sierra central.

En ese proceso de mayores inversiones sociales, acumulación y conflicto, Latorre y Herrera (2012), desarrollan un estudio comparativo en las zonas de mayor conflictividad del momento (petróleo, megaproyectos, minería) y plantean que,

“(…) **esta alianza Estado-capital** también tendrá efectos muy adversos sobre la capacidad de incidencia política e institucional de las organizaciones sociales. En este nuevo contexto político, éstas no sólo **pierden sus articulaciones con intelectuales de izquierda y otras personalidades del gobierno que se habían creado durante la ANC**, sino que además, la recomposición de la institucionalidad estatal le dota al gobierno de una enorme **capacidad para gobernar el conflicto** y llevar adelante su agenda política. (….) a diferencia de los noventa, el conflicto entre los intereses del capital y las comunidades está mediado por el Estado el cual interviene en éste desde múltiples ámbitos o frentes, ensayando una vieja fórmula gramsciana: cohesión y consenso en la construcción de su hegemonía. (….) los procesos de coerción o “disciplinamiento” van más allá de los efectos sobre sus dirigentes (desprestigio, judicialización, encarcelamiento, intervención militar o policial). La intervención del Estado a través, por ejemplo, de los discursos del presidente o de las inversiones sociales implementadas **logra romper con la solidaridad local, la confianza y sus articulaciones inmediatas, logrando atraer a la población y/o dirigentes hacia su proyecto**. Esta capacidad de gobernar los conflictos por parte de la “revolución ciudadana” nos permite decir que el **proceso ha “fracturado la composición de las demandas” que hasta hace poco lograban darle fortaleza interna y legitimidad a las organizaciones**. Es decir, el gobierno, a través de sus avances en la resolución de las demandas materiales e inmediatas de la población (salud, educación, vías, incorporación al proyecto nacional, etc.), y en la incorporación de una vieja demanda de los gobiernos seccionales como es su mayor participación en las regalías de las actividades extractivas, ha hecho que grandes sectores sociales se adhieran a su proyecto político, incluyendo su apoyo a la estrategia extractivista. Como consecuencia de ello, se ha producido un **mayor aislamiento y atomización de los sectores movilizados que suelen ser aquellos directamente afectados por estos proyectos** estratégicos (Latorre y Herrera, 2012:180).

Los autores –a través del estudio de 12 casos– observan que hacia el 2013, el gobierno desarrolló una estrategia compleja en la cual participaban; 1) las inversiones discrecionales y políticas que las instituciones del Estado realizaban en las zonas de conflicto, 2) la promoción de nuevas organizaciones de base, 3) la cooptación de dirigentes que se integraban a PAIS para las elecciones de juntas parroquiales y municipios, 4) la intervención militar y policial, y 5) el desprestigio de las organizaciones a través de los discursos del presidente y varios representantes de gobierno. El resultado era una combinación de miedo, chismes, competencia entre las organizaciones locales, ruptura de la solidaridad con las organizaciones o dirigentes, fractura de las hegemonías

locales y finalmente un cambio de lealtades con las organizaciones. Así, a diferencia del neoliberalismo, el estado había intervenido en los conflictos y había diezmado la capacidad de acción e intervención de las organizaciones. Luego esta observación será matizada con los resultados electorales del 2014, puesto que en las mismas zonas de conflicto, las organizaciones logran contener la presencia del gobierno, aunque sin conseguir frenar el avance de los proyectos e intereses del capital.

Pierre Gausson (2018), en una larga descripción de los límites y contradicciones de la propuesta de la Revolución Ciudadana, plantea que el progresismo en Ecuador se trata de una nueva alianza entre, nuevos administradores del Estado y los intereses del Capital, esta vez en manos de la vieja izquierda que se propone a sí misma como una nueva izquierda. A partir de un análisis del discurso y la política del gobierno, el autor observa que sobre los pueblos se ha levantado una nueva estructura de control y dominación, un proceso *contrainsurgencia* que habría arrasado con el carácter anti sistémico de los movimientos sociales (trabajadores, indígenas y ecologistas).

Para el autor, esto se dio en dos procesos. Por un lado la integración de sus demandas y por otro lado el apaciguamiento de la resistencia. Así, la constituyente habría integrado (institucionalizado y anulado) los proyectos más importantes de los sectores subalternos (Estado Plurinacional, Sumak Kausay, derechos de la naturaleza y las demandas de los trabajadores); y luego en la implementación de la Constitución y la aplicación de la política pública los habría desintegrado o reformado (del Estado Plurinacional al nacionalismo pequeño burgués, del Sumak Kausay al capitalismo verde, de las luchas contra la explotación laboral al trabajo como objetivo); así, el proceso de la Revolución Ciudadana habría anulado las capacidades de los movimientos, un requisito indispensable para cambiar sin que cambie nada, y desarrollar una revolución conservadora (Gausson, 2018:240).

Al mismo tiempo; la criminalización de los subalternos, el combate a la pobreza y la *contrainsurgencia* estatal (refiriéndose a las inversiones “discrecionales” y políticas de Ecuador Estratégico), habrían configurado nuevos espacios de cooptación de dirigentes sociales y herramientas de disciplinamiento de la sociedad (Gausson, 2018:243-291).

En este sentido, la metabolización de una parte de las dirigencias populares dentro del Estado reformado por la “revolución ciudadana” sólo representa la punta de lanza de una ofensiva más compleja en contra de los espacios autogestionados de las clases y grupos subalternos, cuya batería de medidas gubernamentales combina, articula y dosifica elementos de criminalización, combate la pobreza y la contrainsurgencia. Aquí, el dilema para los movimientos antisistémicos no se resume a una alternativa entre ser o no ser cooptados, no ser o ser criminalizados. El peligro es aún mayor... (Gausсен, 2018:325)

Aunque, parte de los argumentos de otros intelectuales coinciden con los efectos del gobierno sobre la acción de los subalternos, esta mirada tienden a eliminar la subjetividad del subalterno y simplificar los problemas como el resultado determinado por la acción desde arriba. A diferencia de Tuaza que ubica los “deseos” de las comunas por servicios y acciones estatales para entender las razones por las cuales las organizaciones dejan de participar, para Gausсен todo se explica por las acciones del Estado. Esto, como plantean Latorre y Herrera (2012), no quiere decir que el gobierno no usó deliberadamente el Estado y la política pública para desmovilizar a la población pero tienden a simplificar la complejidad de los problemas. Sin embargo, también es interesante la argumentación del autor que, para llegar a las afirmaciones contrainsurgentes, nos muestra al Estado como una jaula de derechos y sirve también para ubicar el conjunto de condiciones que el movimiento debe superar en la construcción orgánica de sí mismo.

### **Las dimensiones de la crisis**

Con la llegada de Rafael Correa (2007-2017), aunque mantienen ciertas continuidades, la reflexiones en torno a la crisis cambiaron y para organizar el debate las organizamos en torno a 4 grandes temas.

- *Modernización de la comunidad andina*
- *Límites organizativos (fin de la centralidad política)*
- *Contención política*
- *Débil coalición política*

La *modernización de la comunidad andina*. Los autores, en un contexto en el cual el estado desarrolla importantes inversiones sociales en los sectores populares, estudian los cambios que se producen al interior de las comunidades indígenas, bases sociales del

movimiento indígena. En el centro está el viejo debate en torno a las vías y efectos del creciente avance de la modernidad capitalista sobre el campo, donde la *descomunalización* y *descampesinización* aparecen como motores que transforman la sociedad rural, con esto, el apareamiento de nuevas demandas y subjetividades que alimentan la complejidad de movimiento indígena. Para Gatchet (2013), se traduce en una ruptura de la economía campesina y el desarrollo de una nueva base de acumulación ligada al trabajo obrero, por tanto sus demandas ya no son campesinas y el movimiento no logra representar esas nuevas demandas. Para Tuaza (2009 y 2011), esto puede ser visto como la construcción de nuevas clases que, nacidas en su seno, controlan el mundo indígena campesino. Para Ortiz, (2015) sin que eso signifique la expulsión indígena campesina, la creciente ocupación del territorio por el estado y servicios (urbanización), cambia la estrategia de la comunidad, ya no pasa por el movimiento. En síntesis, en la medida en que la comunidad o la base social que sostienen al movimiento se transforma, se rompen los vínculos con la organización y el movimiento se debilita.

Es el relato de una sociedad indígena que se ha complejizado, y los estudios pasaron de la pregunta ¿cómo ocurre el proceso de descampesinización y descomunalización? a indagar sobre ¿cuáles son los efectos de la descomunalización?. Así, Tuaza (2011), Gatchet (2013) y Ortiz (2013) ponen al debate no solo las complejas tramas de la comunidad, en donde hay una racionalidad pragmática y un horizonte práctico en la relación con el Estado, sino, la configuración de un nuevo régimen de control y dominación en manos de indígenas, resultado de la diferenciación social interna. Además, Tuaza logra observar que la modernización no es secular, sino que, en medio de un discurso y propuesta de gobierno liberal, moderno y universal, se construye un nuevo control estatal que se asienta en viejos dispositivos clientelares y culturales. Temas poco explorados en los debates, pero significativos si consideramos que una parte de las hipótesis sobre la emergencia del movimiento indígena tienen que ver con el fin de la hacienda y la eliminación del control de las poblaciones.

Por otro lado se encuentran los autores que observan la crisis del movimiento desde *los límites organizativos*. En donde, sin vínculos con los cambios estructurales de su base social, Ospina (2009) y Ramírez (2009), casi al comenzar el gobierno de Rafael Correa, en dos visiones distintas observan que la *estructura organizativa* y/o el *modo de funcionamiento* del movimiento son insuficientes para gestionar su vida política interna,

el contexto y entorno político organizativo; las demandas crecientes de sus bases, la relación con el estado (gobiernos locales, instituciones en sus manos), la relación con los distintos actores, la disputa con sus competidos, etc. Límites organizativos que arrastra el movimiento antes de la llegada de Correa, pero que se agrava con las *políticas de contención*.

Sobre este último punto, Wolff (2011), Latorre y Herrera (2012), y Gausson (2018), más allá de los argumentos que extreman la acción estatal o externa de las ONG que termina por olvidar la autonomía relativa de las organizaciones frente al contexto, nos muestran que el gobierno de Rafael Correa construyó una estrategia compleja de intervención sobre las organizaciones sociales, lo cual incluyó, no solo la represión (judicialización de la protesta y persecución de dirigentes) sino que además se apoyó de las inversiones y acción selectiva del estado.

Finalmente, si consideramos que el gobierno de Rafael Correa, gracia al control del estado y la inversión social logra: acelerar los cambios estructurales en la base social; gracias a su posición privilegiada en las esferas públicas (sobre todo los medios de comunicación); y construye una estrategia compleja de contención de las organizaciones (no solo el movimiento indígena), podríamos decir que las relaciones de fuerza en el nuevo contexto cambiaron radicalmente. Herrera (2018) sugiere que el cambio de contexto, debilitó no solo al movimiento indígena, sino al conjunto de organizaciones y en tal debilidad el “movimiento” cambio la estrategia y paso de la movilización al *asedio*. En este caso, la debilidad resulta no solo de la organización y su base, sino de las relaciones de fuerza y la posibilidad de articulación con el conjunto de actores.

Al finalizar este estado de arte del debate en torno a la “crisis del movimiento indígena”, tanto de la primera parte antes del gobierno de Correa y después, la crisis no parece estar del todo resuelta o estudiada. El debate nos plantea una serie de preguntas para entender la crisis, pero no necesariamente tienen continuidad entre un momento y otro, entre el neoliberalismo y el retorno del estado, entre la crisis de partidos y la hegemonía de PAIS, entre el periodo de los movimientos sociales y el gobierno progresista.

Cada texto constituye una pincelada del fenómeno o del momento, tal como Ospina (2008) lo advierte en su trabajo, cada una de las variables por los que transcurre el debate,



en tiempos y condiciones distintas, pueden jugar como un factor de movilización o desmovilización, de articulación o de ruptura. Sin embargo, resulta claro que la crisis es un proceso complejo que tiene distintas dimensiones y que atraviesa las distintas estructuras de organización y esferas de representación.

## **La experiencia de la crisis**

(¿Pero están debilitados?) Hay muchos factores. Uno de ellos es por la pobreza que obliga a la gente a migrar, por la desatención del Estado. Otro es que el Gobierno ha intentado dividir a las organizaciones. Por eso, estamos en un proceso de debate interno y análisis. (Jorge Herrera, en El Universo, 2014)

Hacia el 2018, la crisis del movimiento, vista en términos de capacidad de movilización y coherencia política, resulta bastante más clara. Tras las elecciones en las que gana Lenín Moreno, Correa deja la presidencia y pierde su centralidad política, con esto se abre un momento en el cual se crean expectativas de un gobierno más democrático en el cual las organizaciones puedan recomponerse.

Sin embargo, el gobierno de Moreno, vino con un proceso complejo en el cual; por un lado, abre una estrategia de “Diálogo Nacional” en la que se propone una nueva relación con las organizaciones y movimiento sociales; y por otro lado, rompe con las estructuras de que había heredado de Correa, cede la administración del estado a las viejas elites conservadoras y crea las condiciones para acentuar el neoliberalismo o el giro conservador que había iniciado el mismo Correa.

El problema del momento es que, en la disputa del nuevo gobierno frente a la herencia del correísmo, construye un “discurso” anti-correísta que logra articular la oposición de los medios de comunicación, las elites empresariales y a los movimientos sociales; una alianza conservadora que le permite, marginar a Correa y sus aliados, impulsar la consulta popular y construir una *subjetividad anti estatal*. El gobierno de Moreno aprovechó la crisis del precio del petróleo del 2014 y los casos de corrupción, no solo para orillar a Correa en tanto que responsable del gasto excesivo y la falta de controles, sino que además, le sirvió para trasladar los problemas al gobierno anterior y, frente a la crisis,

justificar la reducción de inversiones, las concesiones, las reformas legales pro-elites, etc., un proceso que fue “celebrado” por las propias organizaciones.

Si bien, en el corto periodo de dos años, las organizaciones sociales ha desarrollado algunas acciones de oposición y han denunciado el carácter conservador del nuevo gobierno, en medio del avance “neoliberal”, priorizan la negociación con el gobierno y, hasta principios del 2019, no logran establecer una acción de oposición a la reconstitución de viejo proyecto neoliberal. Así, la falta de oposición al proyecto conservador de Moreno hace visible que la crisis es un fenómeno común en todas las organizaciones sociales, incluyendo los partidos de izquierda.

En el caso del movimiento indígena, el gobierno de Moreno cambió de actitud, impulsó la solución de los casos de dirigentes judicializados, entregó la cede a la organización, abrió una mesa de diálogo en la que participan varios ministerios para resolver temas relacionados con la educación intercultural, salud indígena, desarrollo productivo etc. Al mismo tiempo el movimiento apoyó la consulta popular y una parte importante de parlamentarios del Pachakutic votaron a favor de las reformas conservadoras. Además, varios dirigentes entraron a participar del nuevo gobierno, Humberto Cholango en la SENAGUA, Luis Macas en el CCPSC y Diana Atamaint en el CNE. En el proceso aparecieron varios conflictos y críticas, se cuestionó la participación de Cholango (hoy es una participación individual), se desconoció a Diana Atamaint como parte de del Pachakutic y se cuestionó los resultados de la participación de Luis Macas.

Pero, el gran signo de la crisis fue la marcha que arrancó 3 de noviembre del 2018, desde Zamora Chinchipe, contra la “Corrupción, por el agua y la vida”; tras 13 días de caminata las organizaciones llegaron a Quito y se reunieron con la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas. El proceso intentó reeditar las marchas del 2012 y el 2014 que, sobre todo en el 2012, habían logrado una enorme convocatoria, pero en el 2018 fueron evidentes las dificultades para movilizar a sus bases.

Al finalizar el 2018, tras las decisiones conservadoras del gobierno (creciente presencia de las elites empresariales en las instituciones de gobierno, ley de desarrollo productivo que condona la deuda en firme de las empresas, normas laborales flexibilizan el trabajo, despido de trabajadores, concesiones mineras, firma una Acuerdo con el FMI, etc.) y los

efectos regresivos en términos de derechos, se esperaba la reacción de las organizaciones, pero primó la negociación.

Tras las elecciones seccionales del 2019, el PK mostró que sigue siendo una fuerza política importante: pero perdió 10 alcaldías entre una elección y otra; entre esas alcaldías se encontraban Nabón un bastión histórico; figuras importantes del movimiento dejaron abiertas algunas contradicciones (Lourdes Tiban perdió en la zona rural y Guillermo Churuchumbi, aunque ganó la alcaldía, perdió en su comunidad de origen); con excepción de Guamote, perdió la provincia de Chimborazo. Su logro más importante fue lograr que un dirigente anti-minero (Yaku Perez) gane la prefectura del Azuay, al tiempo de ganar la consulta popular para evitar la explotación minera en Quimsacocha. Sin embargo, hoy no resulta claro si tendrán la capacidad de articularse, retomar las calles de manera sostenida y convertirse en una alternativa para la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se explica la crisis?

Finalmente, en la medida en que el movimiento es heterogéneo, la respuesta de las organizaciones y la interpretación de la crisis cambia, así por ejemplo, aquello que parece como fatalidad para algunos, no necesariamente es interpretado de la misma forma por las organizaciones. Por ejemplo, Salvador Quishpe plantea que la disputa con Correa fue una oportunidad para reactivar el movimiento:

“Fue un problema serio, y la intención de Correa era terminarnos, pero felizmente aquí en la provincia no lo logró. Esa fue su intención también, logró llevarse un par de dirigentes que empezaron en un momento dado a hablar de una nueva organización de los saraguros dentro de la provincia, pero no pegó; para nosotros fue más bien una oportunidad. Por eso es que el correísmo aquí nunca tuvo éxito, siempre perdieron aquí en la provincia, más allá de que utilizaban todas las artimañas, los recursos públicos, los ministros, etc. Nunca lograron entrar acá, y me parece que una de las cosas que permitió eso fue y es, como dicen que la razón no pide fuerza. Si bien la provincia estaba metida en su cabeza el tema minero, pero con el pasar de los años nuestro análisis logró calar en el pensamiento de la provincia, aquí no vamos a vivir sólo de minería. Vamos a trabajar por varios temas, entre ellos del turismo, y a la gente le ha gustado mucho (S.Q. 2018, Zamora).

Aquí, las diputadas con Correa fueron un eje que les permitió cerrar filas frente a las agresiones y a la vez, abrir un debate sobre la necesidad de alternativas a la minería. Sin embargo, este parece ser un fenómeno más local.

Así, en el contexto de recambio de la Revolución Ciudadana, realizamos algunas entrevistas que permiten recoger la valoración de la crisis desde el mismo movimiento y entender cómo se explica a la luz de la siguiente pregunta ¿Cuál fue el efecto del gobierno de Alianza PAIS sobre las organizaciones sociales?.

Considerando las respuestas, la primera reacción se repite y la respuesta de los dirigentes es más o menos la misma. En la crisis del movimiento pesó el ataque o intervención directa sobre las organizaciones regionales y de base que se combinó con la cooptación de dirigentes, la criminalización, etc.

“Yo creo que el debilitamiento es por la situación de los gobiernos de turno, todos los gobiernos han pretendido dividir a las organizaciones sociales y no se diga a los movimientos u organizaciones civiles, la experiencia es vista en la Federación Shuar ya nos dividieron, nos sacaron una costillita nada más, con el presidente actual nos quieren sacar el logo pero estamos ahí permanentemente dándole, elegimos un nuevo directorio, están encerrados puestos alambres de energía eléctrica, no sé cuánto, no se puede ingresar a la Ficsh” (H.Y. 2018. FICSH, Morona).

“En el gobierno de Correa es eso lo que golpeó, el Estado decide acá sin mediación de la autoridad, entonces golpeó la autoridad de la comunidad. Durante los 10 años de Correa ellos se escondieron (la comunidad y la organización local), no se confrontaron, es ahora que está saliendo la organización de las comunidades, los escenarios son distintos, hay posibilidades dispersas, se abre el abanico de realidades que tiene que enfrentar a comunidad” (J.M. 2018, Latacunga).

Estos testimonios evidencian un elemento que aparece en buena parte de los análisis sobre la crisis y la relación entre el movimiento indígena y el gobierno, las acciones de *contención*. Sin embargo, también existieron acciones gubernamentales de *consenso*, es decir, el gobierno no siempre usó la fuerza, sino la negociación con las organizaciones a través del clientelismo político y la seducción con cargos públicos que, si bien aprovecha

de las tensiones internas de la organización, requieren de la decisión y cálculo de los dirigentes, mucho más cuando se trata de importante figuras políticas del movimiento.

“Para nosotros fue muy duro, pero al mismo tiempo fue una oportunidad enorme. Correa no se dio cuenta, su intención fue terminarnos, de hecho, logró debilitar bastante al movimiento indígena; logró dividirnos, hacernos pelear entre muchos de nosotros, captando a muchos de nuestros dirigentes para las filas de Alianza País. Se lo llevó por decir algo a nuestro expresidente de la Ecuarrunari Ricardo Ulcuango, al prefecto Mariano Curicama del Chimborazo para sus filas, y después ellos empezaron a actuar en contra del proceso de la CONAIE, en contra del proceso de Pachakutik” (S.Q. 2018, Zamora).

Al mismo tiempo, en tal negociación, las organizaciones también se desgastaban esperando que sus acciones tuvieran peso sobre las decisiones del gobierno.

“Nosotros decíamos que era un gobierno en disputa, porque efectivamente ya los temas que se había planteado iban a tal desarrollando y por eso quedaron algunas deudas que efectivamente el gobierno del presidente Correa no cumplió. Pese a que hay victorias que están plasmadas en la Constitución, pero ya en el momento de la ejecución no fueron cumplidas tal como dice la Constitución. Yo ahí puedo poner claramente el ejemplo que la Coordinadora Nacional Campesina habíamos trabajado profundamente en enviar un proyecto de ley de tierras por iniciativa popular. Eso fue un primer ejercicio, inclusive para el país, de que basándose en la Constitución de la República, el derecho a la participación, el derecho a que cualquier organización o cualquier ciudadano pueda enviar un proyecto de ley, pero sin duda cumpliendo con todas las normativas que existían. Hemos cumplido todo pero ahí está un primer distanciamiento que habíamos marcado en el 2012, 2013, hasta el 2014, que efectivamente poco o nada hicieron caso sobre esa ley. Y por eso es la Ley de Tierras tal como salió. (R.G. 2018, Quito)

Tal como lo plantean varios de los trabajos, la presión del gobierno contribuyó en la crisis, pero en la fórmula gramsciana, si bien la literatura resalta las acciones de contención antes que las de consenso; si observamos el gráfico 1, para los entrevistados parecería que pesaron tanto las políticas de contención como las de consenso.

Gráfico 1. La importancia de la Acción gubernamental sobre la crisis



Fuente: entrevistas realizadas

Elaboración propia

El gráfico 1, es una representación visual del peso que los entrevistados le dieron a la intervención gubernamental de contención y de consensos. Cada cuadro representa el número de veces que los entrevistados explicaron la crisis a partir de los efectos que tuvieron las acciones sobre las organizaciones.

En una primera lectura podemos observar que las políticas de contención y de consenso tienen un peso similar para explicar la crisis. Al mismo tiempo, las acciones de contención se combinaron entre acciones de gobierno y acciones del “estado” –aunque puede resultar una división artificiosa–, las primeras se refieren a las acciones realizadas por el presidente y las estructuras de gobierno (ataque a las organizaciones, la criminalización y judicialización); las segundas referidas a los efectos de las nuevas estructuras normativas (marcos normativos como el Decreto Ejecutivo No 16 y coerción administrativa resultado del COOTAD). En tal sentido, el gráfico nos permite hacer una segunda lectura; si bien, los efectos de criminalización o judicialización pueden tener efectos simbólicos muy fuertes en el proceso de desmovilización (Latorre y Herrera,

2013), para los dirigentes y las organizaciones pesó más el ataque y desprestigio que el presidente realizaba públicamente. Al mismo tiempo, el gráfico resalta el uso las estructuras normativas/estatales para la persuasión de las organizaciones, sobre todo las leyes de control para las organizaciones y la coerción administrativa para los gobiernos locales.

De lado de las estrategias de consenso, en el gráfico 1 se resalta el peso del *clientelismo político*, sobre el desgaste de las organizaciones y las inversiones públicas.

No solamente a ha sido el tiempo de Correa, ha sido de gobierno tras gobierno, porque cuando fui muy joven dirigente organizativo, fui presidente de la Asociación de Síndicos de la Comunidad de Sevilla Don Bosco y he sido vicepresidente de la Federación Shuar, en esos tipos los gobiernos de turno, pretendieron dividir a los pueblos y nacionalidades, ahí lo que llamo la debilidad de liderazgo, porque si eres un líder firme no aceptas el dinero que ofrecen. Porque les decían mira hay 120 mil, ahí pon el sueldito tuyo, el sueldito de los dirigentes. Como dicen eso, dice bueno, firmemos el convenio para tal o cual actividad. Esto sucedió con el compañero Sika de Taisha, cuando fue presidente, firmó un convenio pequeño, pero los que disfrutaron fueron solo los líderes, cobraron su sueldo, y el asesor también cobró su sueldo por asesorar mal. Esto ha sucedido año tras año, el lema es "divide y vencerás". (H.A. 2018, Morona)

Resaltamos la importancia del clientelismo político porque, tal como lo señaló Tuaza (2011), resulta contradictorio entender a un gobierno que, tras un paradigma liberal, se planteaba la modernización del estado, este se asentó en los territorios, cambió las lealtades de las organizaciones y sedujo a dirigentes, sobre prácticas y tradiciones políticas conservadoras, en este caso, el *clientelismo político*.

También es importante resaltar que, con las acciones de consenso se promueve ciertos comportamientos y cálculos al interior de las organizaciones; en la acción de comprar dirigentes, no podemos olvidar que hay una decisión y cálculo de los mismos dirigentes. Esto sin desconocer que las relaciones de fuerza desiguales y el hecho de que gobierno mantiene una relación de poder sobre la sociedad y las organizaciones.

## **El estado como trampa**

Seguramente, el peso las organizaciones otorgan a las acciones del gobierno varía de un lugar a otro y de una organización a otra, pero en todos los casos, el proyecto de recuperación y modernización del Estado se tradujo en una creciente ampliación de las inversiones y ampliación de servicios, así como en un intento de reforzar la capacidad control del Estado sobre la sociedad y el mercado. Esta recuperación del Estado fue una demanda presente en las mismas organizaciones sociales que frente al neoliberalismo demandaron salud, educación, derechos, reconocimiento, etc. Sin embargo, la propuesta “modernizadora” del estado desarrollada por el gobierno, no necesariamente cambió su lógica y sus prácticas. La recuperación de estado y la política pública actualizó un viejo problema para las organizaciones indígenas y campesinas, reeditando el proyecto desarrollista (colonial y patriarcal) que hizo “tabla rasa” con la experiencia de las organizaciones; desde la eliminación del Codenpe hasta la eliminación de las escuelas rurales que tanto costaron a las comunidades.

Las nuevas leyes y avances constitucionales, así como los planes, programas y proyectos, aunque fueron recibidos inicialmente con mucha expectativa, se levantaron sobre prácticas de discriminación que no se propusieron cambiar. El Pueblo Kitu Kara, por ejemplo, señaló que el MAGAP no creó mecanismos que permitan reconocer la autoridad y autonomía indígena.

“(…) el pueblo Kitu Kara hace un acompañamiento jurídico ya llevado a otros niveles, pero la normativa es clara de que las comunas son autoridades territoriales y hacen ejercicio de la autoridad en base a sus costumbres y tradiciones, las asambleas y sus reglamentos internos. ¿Cuál es el sustento de la ministra para emitir otro nombramiento? es de que la comuna estaba en acefalia, la cual nunca estuvo en acefalia porque convocó y eligió su cabildo” (F.C. 2018, Quito)

El estado se “extendió” en los territorios sin tomar en cuenta la experiencia acumulada, las construcciones culturales de la población y sus luchas históricas. Un ejemplo de esto es escuela del milenio construida con el objeto de mejorar y modernizar la educación en las zonas indígenas de Cotopaxí, en Zumbagua a los 4000mts. Para construir levantar la nueva escuela se eliminaron las escuelas comunitarias de la zona que habían sido construidas y mantenidas durante años por las mismas comunidades, las comunidades



incluso llegaron a pagar los profesores. Sin duda había que revertir el abandono estatal pero se desconoció la importancia organizativa y simbólica que las escuelas tenían dentro de sus comunidades. En la actualidad la gran escuela del milenio no funciona, las comunidades prefirieron llevar a sus hijos a otras zonas antes de llevarlos a la escuela del gobierno.

“Las escuelas del milenio se levantaron sobre la irracionalidad de la racionalidad absoluta. Cuando se montaron el proyecto de la escuela del milenio ahí, les dijimos que no funcionaria, porque está descubierta, la gente tienen sus escuelitas ahí donde no les da el frío, pero además las gentes de las comunidades de arriba no irían porque hay rivalidades, hasta un muerto hubo, y la gente no va, pero eso no entienden los nuevos directores de la educación. Y así despojaron a las comunidades de sus escuelas ¿por qué?”(P.M. 2018, Latacunga)

Tras la escuela del milenio, lo que vemos es el avance modernizador del Estado, pero a costa de subvalorar la autonomía y autoridad que históricamente las organizaciones habían construido.

“Antes (del gobierno del Correa), el movimiento indígena era un apoyo para las comunidades, porque visibilizaban las necesidades de las comunidades. Eran voceros y luchaban conjuntamente para tener atención directa a las comunidades. Aprobar en nivel constitución sobre pueblos y nacionalidades, pero el momento de ejecutar no se cumple. Ahora en el tema de organización, si hay gente que acompaña, los dirigentes si participan. Hay varias actividades en temas de capacitación que está haciendo el Movimiento Indígena (MICC) pero el gobierno avanza más rápido, con más plata” (C.C. 2018, Latacunga).

Desconocido las diferencias culturales y la importancia de los pueblos indígenas y sus autoridades.

El ataque fue a las comunidades, él era alérgico a poderes paralelos, comenzó a atacar, en Guangaje empieza a la titulación privada de terrenos comunales. 2010-2011. El municipio legalizo tierras, proceso de escritura privada, es cuestión de tiempo porque su finalidad era recaudar impuesto. El ataque feroz fue contra autoridades de comunidades indígenas, con el genérico de ciudadano quiso borrar las diferencias culturas, hay una folclorización de lo indígena. La vestimenta, termino siendo ridículo porque no consiguieron nada. El

intento de proyectos comunitarios de turismo, que fracasaron porque los hoteles de Quito venían en paquete a los turistas. Desmitificación de los Yachay, minimizar, suplantar eso con subcentros de salud. Rompió con todas las lógicas de los pueblos indígenas. (P.M. 2018, Latacunga).

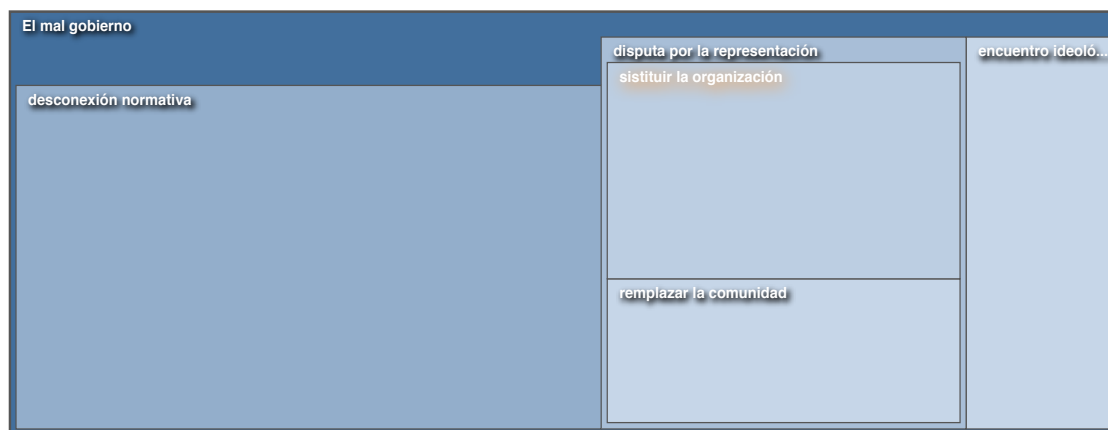
Así, la lógica del gobierno entró en conflicto con las lógicas de la comunidad, y en la disputa se “desplazó” a la organización y la comunidad misma. Además este proceso, en el cual la organización indígena pierde importancia, se desarrolló gracias a que, en el interior de las mismas comunidades existía un *demanda de más estado y servicios*, tal como sugiere Ortiz (2015).

A la racionalidad de estado que se impone sin consideración de las demandas indígenas campesinas es lo llamamos el “mal gobierno”<sup>16</sup>, sobre todo porque la Revolución Ciudadana prometía, revolucionar y democratizar la sociedad. Si bien, dadas las inversiones sociales, el gobierno pudo hacer gala de los éxitos de la gestión, la experiencia de la población no fue necesariamente satisfactoria. El gráfico 2, recoge los testimonios y reflexiones de los efectos de la acción del Estado sobre las organizaciones, y nos muestra que la expansión o retorno del estado constituyó un problema para las organizaciones por la desconexión entre las nuevas normativas y las demandas o la realidad local, los proyectos e inversiones sustituyeron la mediación que habían hecho las organizaciones, el retorno del estado intentó remplazar la comunidad y las formas representación/autonomía indígena

Grafico 2. El peso del “mal gobierno”

---

<sup>16</sup> El “mal gobierno” es una forma simbólica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para caracterizar los gobiernos neoliberales y coloniales responsables del empobrecimiento de las comunidades indígenas de Chiapas, así también, establecer las diferencias entre el mal gobierno (la construcción histórica del estado mexicano) y las Juntas de Buen Gobierno que el EZLN organizó para el gobierno autónomo de las comunidades indígenas.



Fuente: entrevistas realizadas

Elaboración propia

El gráfico 2 sintetiza el peso que los entrevistados le asignan al “estado”, su racionalidad, sus normas y sus prácticas modernizadoras sobre la crisis de las organizaciones. Al interior de esa experiencia vemos que, por un lado, pesó la desconexión entre las nuevas estructuras normativas y las necesidades o expectativas de la población. Por otro lado, las nuevas inversiones del gobierno, no solo, no lograron conectarse con el deseo de estado, en términos de servicios, derechos e inversiones, sino que el nuevo avance estatal, disputaba por la representación social y política que las organizaciones (sus usos y costumbres, sus formas de organización, autonomía, etc.) habían construido para defenderse del mismo estado y sobrevivir al capital. Vale recordar que la comunidad y la organización fueron los espacios de “intermediación” entre las demandas de las población y los servicios del estado, y a la vez representaban la organización para la disputa política frente a los hacendados, las elites locales, los distintos gobiernos y las empresas transnacionales interesadas en la apropiación selectiva de su trabajo y de sus recursos.

Pero, según Floresmilo Simbaña, el “retorno del estado” era mucho más que inversiones y atención a la población, era parte del proyecto y deseo de las organizaciones sociales.

“El Gobierno tuvo efectos bastante complicados, porque el pensamiento, la propuesta política e incluso ideológica de la CONAIE, e incluso de toda la izquierda, es pensada en circunstancias de profunda derrota, de retroceso y de avance del neoliberalismo. Por lo tanto, muchos de los lugares comunes –y no lo digo en términos de desprecio, sino sólo descriptivos- el lugar común de la izquierda, incluida la CONAIE, era pensar en el Estado. Entonces, toda la estrategia, toda la estructura ideológico-política está alrededor del

Estado: el retorno del Estado, la recuperación del Estado. Y resulta que Correa hace eso, recuperar el Estado. Y entonces, eso desarma a la izquierda y desarma al movimiento indígena” (F.S. 2018, Quito)

Para Simbaña, entre el retorno del estado organizado por la Revolución Ciudadana y el deseo de estado presente en las organizaciones sociales se produce una “sintonía” que desarma al movimiento. Podríamos decir que el proyecto del movimiento, aunque podría ir más lejos, se entrapa en el horizonte estatal en donde se canalizaron las demandas y donde se encontraban las demandas concretas de la población y de las mismas comunidades.

### **Factores organizativos de la crisis**

Como se mencionó en los capítulos anteriores, los testimonios también dan cuenta de que la crisis del movimiento indígena precede al gobierno de Rafael Correa y estuvo asociada a factores estructurales y cambios organizativos de larga data. Entre los factores estructurales se encuentran aquellos procesos ya mencionados que reforzaron la descampesinización y descomunalización, por ejemplo la migración y los nuevos mercados/redes de trabajo.

La crisis ha sido uno de los problemas por lo cual salen. Hay un porcentaje alto de migración, en las comunas hay adultos mayores y niños. La gente de entre 15 y 35 años están afuera en un 90 %. En Guangaje temporalmente salen a trabajar y dejan a los niños con sus abuelos o hermanos mayores. En otros casos sale el padre y queda la mama en la casa. Regresan a ver a las personas. Es raro que vengan por siembra o cultivos. La producción agrícola se ha agotado, ahora se cultiva para consumo. En Tigua hay 5 familias por comunidad que siembran para vender. Estas familias tienen un capital de la migración y eso invierten en la tierra, para la gente que vive en la comunidad es muy difícil invertir ya que les resulta caro. (...) En su mayoría son comerciantes, son negociantes. Otro grupo trabaja en albañilería y construcciones. Otro grupo trabaja en plantaciones. Antes mucha gente viajaba a Tulcán, mayor migrantes de Guangaje para trabajar la tierra. Se fue a la quiebra estos últimos 10 años. Ahora están en Quito y tienen negocio de compra- venta. En Quito, un 80 % de migrantes de Tigua son negociantes. Asociación de tricicleros, (300) en el mercado Mayorista en Quito. Estibadores. (R.I. Guangaje, 2018)

El problema es que, debido a los límites del modelo productivo campesino y la falta de política pública adecuada, la migración y el ingreso extra parcelario como trabajadores, en algunas zonas se ha convertido en la “nueva realidad” rural o campesina, que a la larga tiene efectos en las dirigencias y las estructuras de representación. Así por ejemplo,

“La mayoría de las dirigentes de las comunidades viven fuera de la comuna, solamente 4 de los dirigentes de la zona de Tigua viven en el territorio. La Diferencia en la gestión tiene que ver con un tema político, muchas veces los que están afuera logran gestionar más rápido, que los están en la comunidad. La facilidad de los que están en territorio es que ellos pueden salir en cualquier horario, cualquier problema de inmediata solución, lo asumen ese rato. Esa sería una diferencia, con el dirigente que está en Quito, ahora con la tecnología se entera, pero no es lo mismo que poder atender ese rato el conflicto. Algunos también buscan ayuda de los que están en la ciudad porque quieren que esa persona ayude a solucionar el problema.” (C.C. 2018, Latacunga)

“Los dirigentes no viven en la zona, reúnen cada 2 o 3 meses. Es un problema, porque se agotan en las gestiones, en la comisión, se toma la dirigencia como un **espacio político-electoral**. Trabajan bajo intereses personales, jóvenes que ingresan con una visión de proceso organizativo y de pronto quieren ocupar un espacio electoral. Eligen gente que no vive en la comuna para dirigir desde hace 5 años. Antes se elegía a los que viven en la Comuna. Ahora ya no tiene valor el directivo porque no hay voluntad de ayudar a la gente, ya no hay poder de convocatoria” (R.I. 2018, Guangaje).

Con seguridad hay otros fenómenos que afectan la dirigencia indígena, pero los testimonios nos muestra que hay nueva condición de los dirigentes (migrantes, urbanos, profesionalizados, con nuevas herramientas técnicas y aspiraciones sociales) que modifica la dinámica de las organizaciones indígenas. El problema es que los *nuevos dirigentes* que viven en las ciudades y no viven de la tierra, tienen menos interés por el mundo campesino; y en el marco de sus aspiraciones políticas pugnan con las viejas dirigencias que crecieron en la lucha por la tierra y que aún constituyen una base política de orientación importante.

Hay pugnas internas entre ayllus, esas tenciones a veces provocan muertes, eso por lo general se dan en las fiestas. Manejan el poder de la comunidad. Los ancianos son los que

mandan, ellos tienen el poder real en la comunidad, no decide el presidente de la comuna. Frente a esto no hay nada que hacer porque hay una relación de dependencia. Reverencia por su trabajo histórico. Prestigio por lo que hicieron, conservan una línea de acción que hace años hicieron. Esta autoridad está Viciada, porque no logra comprender los nuevos escenarios de la realidad de la comunidad. (J.M. Latacunga, 2018)

Las observaciones de los entrevistados nos cuentan que en pocos años el movimiento se transformó, cambiaron sus bases sociales y sus estructuras políticas de representación. Hoy, el movimiento se compone de una heterogeneidad social, cultural y política que resulta difícil de representar y organizar políticamente. Un problema es que frente a la nueva realidad el proyecto y discurso político tienen más dificultad de adaptarse,

“Hoy hay mucha debilidad de la organización pero hemos hecho algunas cosas, intentamos que las autoridades se mantengan bajo la organización y no al revés, la realidad de las comunidades es distinta, nuestros compañeros están de migrantes, como trabajadores informales, entonces hay que buscar la forma de mantenerlos organizados, de luchar por sus derechos, ya no como indígenas, sino que además como trabajadores con derechos laborales. Esos son temas en los que estamos trabajando, pero el camino es lento, el proyecto de la CONAIE tiene un enfoque más de la tierra y el territorio” (L.I. 2018, Latacunga).

“Y por lo tanto, si no tenemos una lectura más objetiva y, si se quiere, científica, de lo rural, de lo agrario, en lo político tampoco vas a poder tener conclusiones objetivas, si cabe el término. Entonces, la CONAIE se debate desde hace unos 10 o 15 años en su discurso entre agrarista y más político. Entonces, ahí hay un vaivén que no se ha podido superar hasta ahora. La debilidad es ésa. La debilidad, fruto de esta circunstancia, es que ha perdido capacidad de forjar acciones de consenso a nivel interno. Eso es lo que el gobierno de Correa lo que hizo fue estimular esas diferencias internas para dividir al movimiento indígena” (F.S. 2018, Quito).

También podríamos decir que si bien la diversidad en un momento fue la mayor fortaleza del movimiento, hoy la heterogeneidad y diferencias internas constituyen una debilidad frente a la estrategia de contención/persuasión/cooptación de dirigentes. Al mismo tiempo, los testimonios anteriores nos dicen que el proyecto de la CONAIE no es suficiente para recoger las nuevas realidades y transformaciones de las comunidades y poblaciones que pretenden representar (hasta hace poco campesinas), así como no logran

recoger las demandas de estos nuevos mercados de trabajo a los que están articulados los indígenas.

Al punto que los cambios en la organización y la nueva dirigencia parecen estar “disputando” el proyecto político del movimiento. Fernando Cabascango plantea que el proyecto plurinacional tiene límites para representar a otros sectores

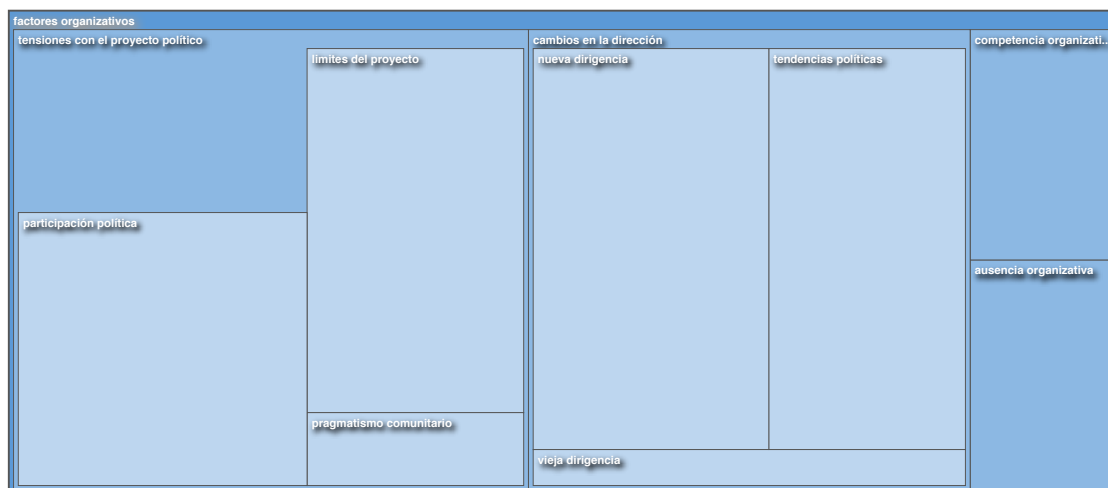
“(…) la ciudadanía no es parte de un pueblo o nacionalidad indígena, pero tiene la capacidad de autogobernar territorio o tener control sobre el territorio, yo creo que ahí hay algunos elementos que no se comprenden muy bien desde la plurinacionalidad, sino se está dejando como si el estado plurinacional es solo para los pueblos y nacionalidades, y hay una sociedad blanco-mestiza que cree que ese no es un derecho ganado para ellos, ahí hay que discutir todavía, desde los pueblos y nacionalidades se planteó la capacidad articular con estos otros sectores” (F.C. Quito, 2018)

Y Marcelino Chumpi, nos dice que el Estado Plurinacional no tiene ideología

Hay que entender que el Estado plurinacional no tiene ideología, no tiene partidos políticos además no tiene idioma ni lenguaje y si se quiere meter una sola ideología y empiezas a gobernar ¿Qué vas hacer con todos esos ecuatorianos que no tienen esa ideología? Entonces no se puede pensar que el movimiento Pachakutic es de izquierda y yo sostengo esa tesis ¿Por qué? Porque nosotros somos la chakana y debemos incluir a todos y debemos aprender a gobernar entre todos. El sistema presidencialista no es correcto debe ser un gobierno semipresidencialista. (M.Ch. Morona Santiago, 2018).

Al finalizar la revisión de estos testimonios, nos interesa resaltar que la debilidad del movimiento también puede explicarse como un fenómeno interno. El gráfico 3, intenta hacer una representación del peso que tienen los factores organizativos para nuestros entrevistados.

Grafico 3: factores organizativos de la crisis



Fuente: entrevistas realizadas

Elaboración propia

En el gráfico<sup>3</sup>, podemos ver que para los entrevistados existen 4 grandes factores organizativos: las tensiones con el proyecto, los cambios en la dirigencia de la organización, la competencia organizativa y la ausencia de las organizaciones en las bases, pero pesan más lo límites del proyecto político y cambios en la dirección; es decir, los límites de la organización representar una realidad social que ha cambiado -aquí pesa la disputa por la participación política electoral en lo local, así como las transformaciones asociadas a la creciente destrucción del mundo campesino- y las crecientes tensiones en la dirección del movimiento, sea por que los nuevos dirigentes (urbanos, profesionalizados) disputan con las viejas dirigencias (dirigentes históricos con fuerte vínculo comunitario y que lucharon por la tierra), o sea por las disputas entre las diferencias o tendencias políticas que existen en la organización.

## Conclusiones

A manera de conclusión, nos parece relevante insistir en que la crisis no es un debate acabado y quedan muchas esferas por explorar. El carácter coyuntural de la mayor parte de trabajos y la complejidad del movimiento muestran que las variables con las que se describen la crisis pueden jugar de manera distinta dependiendo el momento y la esfera del movimiento que se analiza. Pero una de las primeras cosas que llama la atención es que en general, los autores toman una variable y un momento específico, dejando por



fuera varios de los procesos que explicaron la “emergencia del movimiento”<sup>17</sup>; así por ejemplo, hay pocos esfuerzos para entender el rol de los actores externos (iglesia, partidos de izquierda, clases medias, otros movimientos), el cambio de las coaliciones políticas entre un contexto y otro, la importancia de los factores económicos, el rol de las elites y los cambios en el régimen de dominación.

A pesar de lo dicho, en el siguiente esquema podemos ver en el planteo de los distintos autores, una continuidad de los factores que estructuran la crisis

La crisis en el neoliberalismo (2000-2006)	La crisis durante el gobierno de PAIS (2006-2019)	Experiencia de la crisis (2018)
<p><i>Fractura de la base comunitaria.</i></p> <p>Diferenciación política, Complicidad de la dirigencia, Cambio de hegemonía interna, y <b>cooptación externa</b>,</p> <p>Los límites del proyecto</p>	<p><i>Modernización de la comunidad andina</i></p> <p>Límites organizativos (fin de la centralidad política)</p> <p><b>Contención política</b></p> <p>Débil coalición política</p>	<p>Los factores organizativos</p> <p><i>Cambio estructural de su base campesina</i></p> <p>Tensiones con el proyecto político</p> <p>Cambios en la dirección del movimiento</p> <p><b>El retorno del “mal gobierno”</b></p> <p><b>La contención del gobierno</b></p> <p>Ataque y criminalización</p> <p>Coerción normativa y administrativa</p> <p><b>La construcción de “consensos”</b></p> <p>Inversión pública</p> <p>Clientelismo político</p> <p>Desgaste organizativo</p>

<sup>17</sup> Sobre el tema podrían mencionarse: La importancia de las articulaciones y actores externos al movimiento (partidos e iglesia), el rol del estado en la configuración de las nuevas organizaciones (las inversiones y programas que tenían como objeto la construcción de actores de intermediación), la agresión de la economía sobre la reproducción de la comunidad (trabajo, el crédito, la oferta de ascenso social, la apropiación de recursos, la ruptura de instituciones), la crisis del régimen de dominación (la crisis de la hacienda y el control de poblaciones), el vacío político y la falta de espacios de representación (crisis política), la configuración de los intelectuales propios, la autonomía social y cultural frente al capital (la comunidad como núcleo de reproducción económica, social y política).

Por un lado, encontramos los cambios en el seno de la comunidad andina o “modernización” resultado del cambio estructural producido por el avance del capitalismo en el campo, un largo proceso que se acelera con las inversiones sociales en el campo y la creciente integración subordinada de las comunidades –sea por la migración, los procesos de urbanización, la incorporación de nuevos hábitos de consumo, etc.–. Por otro lado, los problemas de la organización y su proyecto, los cuales, en tanto que es un movimiento social, siempre son procesos cambiantes que dependen del conjunto de factores que se ordenan en cada coyuntura, no dependen exclusivamente de del movimiento, sino de la fortaleza o debilidad del conjunto de actores. Pero, hay que matizar la crisis y reconocer en el movimiento indígena la fortaleza para mantenerse como un actor importante; primero como núcleo de articulación social frente al neoliberalismo; luego como uno de los actores más importantes en la oposición a la Revolución Ciudadana.

Finalmente, el elemento que tiene mayor peso en los argumentos es que, si bien con el gobierno de Gutiérrez las organizaciones vivieron procesos de intervención cooptación de dirigentes, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se convierte en el actor central de la cooptación externa y los procesos de contención de la movilización social. A lo cual se suma, en la experiencia, el retorno del “mal gobierno” entendido como presión secular/colonial que ejercen las instituciones estatales sobre las estructuras tradicionales de organización rural, la autoridad del cabildo, la gestión de recursos productivos, administración de la escuela, autonomía en la gestión de sistemas de agua, etc.

Para pensar la crisis desde la debilidad organizativa (dificultad del movimiento para movilizar y articular a otros sectores), es importante entender que las organizaciones soportan las tensiones que vienen de su base -la transformaciones estructurales en el seno de la comunidad, la creciente complejidad interna, gobiernos y coaliciones locales– y las tensiones que vienen de la acción gubernamental de PAIS, además de las disputas por la representación con otros actores que se ven a sí mismo como estructuras de representación nacional (FENOCIN, FEI, FEINE, Alianza Indígena, CNC, Pueblo Montubio).

En este proceso, el gobierno de Rafael Correa funciona como un catalizador que acelera las tensiones internas. Las inversiones sociales acentuaron los procesos de diferenciación campesina y la acción política polarizó las diferencias internas. En el tiempo, como el resto de organizaciones, las organizaciones indígenas se fragmentaron –un fenómeno muy claro en Chimborazo. Además, los testimonios enuncian un problema mayor, la creciente tensión entre una realidad rural que se integra de manera acelerada a las dinámicas del desarrollo del capitalismo y el proyecto político que se define como plurinacional de izquierda, indígena, campesino y popular. Algunos testimonios muestran que hay intentos de actualizar el discurso y procesar la nueva realidad del movimiento y su base.

Para algunos dirigentes, la disputa con Correa fue una oportunidad para reforzar la fortaleza cultural (comunidad y lealtad étnica), mostrar a los gobiernos locales como refugio político, entender que la composición social/territorial de su base, enfrentada a las fronteras de extracción, obliga al movimiento a mantener una posición de antagonismo contra las elites, el estado y las empresas. Sin embargo, Correa es mucho más que un catalizador de las dinámicas, como lo mencionan los testimonios, levantó una estrategia compleja de contención sobre las organizaciones, estrategia que en varios momentos resultó efectiva y aún están por estudiarse sus efectos.

Evidentemente, nada de eso cierra la posibilidad de que las organizaciones puedan recuperar su capacidad de movilización social y superar las diferencias internas que tienden a romper con la fortaleza de organización. Tras la salida de Correa y la recomposición del escenario político no está muy claro cuáles serán las vías para superar la crisis, por lo cual es importante volver al tema pero observando que el movimiento ha cambiado y con él la crisis está en movimiento, con lo cual necesitamos de miradas complejas y procesuales que superen la tendencia a mirar el movimiento desde un aspecto o en un contexto.

## Bibliografía

- Bretón, Víctor. 2001. "Capital social, etnicidad y desarrollo: algunas consideraciones críticas desde los Andes ecuatorianos", en Yachaykuna, No. 2, p. 6. en: <<http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/2/breton.pdf>
- Bretón, Víctor. 2018. "La comunidad andina revisada: cuestión agraria y cuestión indígena en Chimborazo, Revista Ecuador Debate, No 103, pg. 159-173. Quito.
- Becker, Marc. 1999. Una revolución comunista indígena: movimientos de protesta rurales en Cayambe, Ecuador', MARKA, Instituto de Historia y antropología Andinas, Quito-Ecuador, memoria,1999, 7: 51-76
- Barrera, Augusto. 2001. "Nada solo para los indios", Revista Iconos, No 10, Flacso Ecuador, Quito. Pg.39-47
- Cueva, Agustín. 1993. "Los Movimientos sociales en el Ecuador contemporáneo: el caso del Movimiento indígena", en Revista de Ciencias Humanas No 13, pp. 31-46.
- Dávalos, Pablo, 2006, "Ganamos pero perdimos: Balance de los logrado y problemas pendientes", en Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez, 2006, (coordinadoras) *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, México.
- Dávalos, Pablo. 2003. *Movimiento Indígena Ecuatoriano: bitácora del camino*, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito. En: <https://bit.ly/2DphArTv>
- El Universo, 20 de mayo 2014, "Jorge Herrera: 'Si alguien quiere imponer su agenda, no lo permitiremos', entrevista, en <https://bit.ly/2GszY3N>
- Guatemal, Miguel. 2006. "La situación del movimiento indígena en Ecuador" en, Escárzaga y Gutiérrez. 2006. Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez, 2006, (coordinadoras) *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, México.
- Gachet, Francisco. 2013. Economía y política en Guangaje, Tesis de Maestría, FLACSO. Quito.
- Gaussens, Pierre. 2018. "La izquierda latinoamericana contra los pueblos: el caso ecuatoriano (2007-2013)". CIALC-UNAM, México.
- González Casanova, Pablo. 1963. Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo. *América Latina*, 6 (3), 15-32.
- Herrera, Stalin; Sara Latorre, Pablo Iturralde y Paola Sánchez, 2013, *¿A quién le importa los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo*, Instituto de

Estudios Ecuatorianos (IEE) – Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito.

Herrera, Stalin. 2017. “De la Alternativa Política al Asedio como Política: escenarios para los movimientos sociales en el Ecuador”. mimeo.

Hidalgo, Francisco. 2003. “Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía: el caso del Ecuador”, en *Revista Herramienta N° 25*, Buenos Aires, <http://www.herramienta.com.ar/revista-impresa/revista-herramienta-n-25>

ICCI. 2002. Evaluación política del Movimiento Indígena Ecuatoriano, Boletín ICCI-Ary-Rimay Año 2002 n. 34. ICCI, Quito. pg. 2. En: <http://icci.nativeweb.org/boletin/34/editorial.html>

Ibarra, Hernán. 1999. “Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador”, en *Ecuador Debate: revista de ciencias sociales*, N° 48, Centro Andino de Acción Popular, Quito. En: <https://bit.ly/2ZnFUf>

Macas, Luis. 2000. Movimiento indígena ecuatoriano: una evaluación necesaria, Boletín ICCI-Ary-Rimay. Año 2000, n.21 p. 5. Quito.

Martínez, Luciano, 2005, El Movimiento indígena ecuatoriano en la encrucijada En *Alasru-Análisis Latinoamericano del medio rural Chapingo*, México- Alasru, 2005-2006, Año 2005, n.2 p. 121

Miguel Guatemal, 2006, "La situación del movimiento indígena de Ecuador" en, Escárzaga y Gutiérrez. 2006. *Ganamos pero perdimos; elementos para la un balance del movimiento indígena en el Ecuador*. Centro de estudios andinos y mesoamericanos. México.

Ortiz, Santiago. 2013. “Comuneros y Revolución Ciudadana”, *Antropológica*, No 31, pp 81-100.

Ospina, Pablo y Fernando Guerrero, 2003, *El Poder de la comunidad. Ajuste estructural y Movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*, Buenos Aires, Colección Becas de Investigación CLACSO –ASDI. Pero su énfasis es explicar el procesos de constitución y emergencia más que la crisis del momento.

Ospina, Pablo. 2006, *Protesta Indígena y movimiento popular*, mimeo.

Ospina, Pablo. 2009. “‘Nos vino el huracán político’. La crisis de la CONAIE”, en Pablo, Ospina y Olaf Kaltmeier, eds. (2009). *Los Andes en movimiento. Sociedades andinas, Estado y cultura política*. Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad de Bielefeld / Universidad Andina Simón Bolívar.

- Ramírez, Franklin. 2009. El movimiento indígena y la reconstrucción de la izquierda en el Ecuador, El caso del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País (PK), en Ospina, Pablo, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges, edits., 2009, Los Andes en Movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político, Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional / Universidad de Bielefeld, Quito.
- Salto, Napoleón. 2001. Movimiento indígena y movimientos sociales: Encuentros y desencuentros, ICCI, Boletín RIMAY. No 27. Quito. En: <http://icci.nativeweb.org/boletin/27/saltos.html>
- Sánchez Parga, José. 2001. "Transformaciones del conflicto, decline de los movimientos sociales y teoría del gobierno", en Ecuador Debate, No 53, Centro Andino de Acción Popular, Quito, Pg. 19-40.
- Sánchez Parga, José. 2007. El Movimiento indígena ecuatoriano: la larga ruta de la comunidad al partido. CAAP. Quito.
- Santana, Roberto. 2004. "Cuando las elites dirigentes giran en redondo: el caso de los liderazgos indígenas en Ecuador". En Ecuador Debate. No. 61. CAAP. Quito.
- Simbaña, Floresmilo. 2007. "Movimiento Indígena y actual proceso de transición", Boletín ICCI RIMAY, No. 102. Quito.
- Svampa, Maristella. 2008. Cambio de época. Poder político y movimientos sociales.
- Tuaza, Luis Alberto. 2009. "Cansancio Organizativo", en Carmen Martínez. 2009. "Repensando los Movimientos indígenas." FLACSO. Quito. 245 p.
- Tuaza, Luis Alberto. 2011. Runakuna ashka shaikushka shinami rikurinkuna, ña mana tandanakunata munankunanchu: la crisis del movimiento indígena ecuatoriano, FLACSO, Quito.

## **Entrevistas:**

- Angelina Chumpi. 2018. Presidenta de la **Coordinación Equidad, Formación y acción social- CEFAS** Función
- Cecilia Cuyo. 2018. Presidenta de **CITIGAT**. Latacunga
- Cesar Lutuala. 2018. presidente **UNORIG**. Guangaje
- Consuelo Vega Olmedo. 2018. Vice-prefecta de Morona Santiago. Morona.
- Fernando Cabascango. 2018. **Pueblo KITU KARA**. Quito.
- Floresmilo Simbaña. 2018. Intelectual indígena exdirigente de CONAIE. Quito.

Hector Ayuy. 2018. Dirigente de la **FICSH**. Morona.

Hermel Tuyupanda. 2018. Alcalde del **Cantón Colta**. Colta.

Jaime Chugchilan. 2018. Presidente Microempresa asociativa de **estibadores, tricicleros y cuidadores** “Atahualpa”. Quito

José Manangon. 2018. Cura Secretario Ejecutivo del **SEIC**. Latacunga.

Marcelino Chumpi. 2018. Prefecto de Morona Santiago. Morona.

Narvárez Ijisam. 2018. Presidente de la Nación Shuar del Ecuador- **NASHE** cantón Taisha.

Rodrigo Ilaquiche. 2018. Vice presidente de la **Junta Parroquial Guangaje**. Guangaje.

Romelio Gualán. 2018. CNC-EA, Quito.

Salvador Quishpe. 2018. Prefecto de Zamora Chinchipe. Zamora.

Leonidas Isa. 2018. Presidente del **MICC**. Latacunga.

Mariza Salazar. 2018. Militante del **MICC**. Latacunga.

Severino Sharupi. 2018. Ex dirigente de la **CONAIE**. Quito.